

2010

FECHA: 01-09-2010

Casas de ira Ciudad de México El sábado 21 de agosto el despacho del alcalde de Jiutepec, Morelos, se llenó con las voces de los ciudadanos irritados con autoridades protectoras de los depredadores del medio ambiente.

A Jiutepec lo gobierna el PRD, linda con Cuernavaca y su riqueza ambiental está siendo devastada. En un acto irregular y con aroma a corrupción, el cabildo aprobó el 22 de septiembre de 2009 el cambio de uso de suelo de cinco grandes terrenos. En uno de ellos la normatividad permite construir 47 casas y aprobaron 280 casas sin que exista agua, drenaje o vialidades adecuadas y se encuentra en una zona que ya se inunda con aguas negras. La constructora inició la edificación y los vecinos -entre los que me encuentro- se inconformaron, demandaron y fueron respaldados por medios entre los que destaca la cobertura dada por el programa radiofónico conducido por Gina Batista y Salvador Valora en Mix FM de Cuernavaca. El empresario. El dueño de Casas Tecmourbe, Salvador Aguilera, se contuvo pero al final se desahogó: "informaremos a las otras constructoras que en Jiutepec los ricos no quieren que se hagan casas para los pobres". Es loable construir casas de interés social y en esta década se ha modificado el paisaje urbano. La sustitución de milpas por unidades es consecuencia de una política agresiva; en el sexenio de Fox sólo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores entregó más de dos millones de créditos. Algunas empresas se apegan a los criterios del "nuevo urbanismo" y entregan viviendas dignas en fraccionamientos bien pensados. La mayoría sólo va por la ganancia rápida sin importarles la calidad de los materiales, la construcción de tejido social, la preservación del medio ambiente, los accesos o lo que piensan las comunidades afectadas. El método es sencillo: con cañonazos en efectivo "convencen" a autoridades para que cambien el uso del suelo y después logran que las autoridades reciban las obras irregulares. El funcionario del gobierno morelense. Hugo Salgado es secretario de Turismo y coordinador del Gabinete de Desarrollo Económico Sustentable. Ha intervenido constantemente a favor de Casas Tecmourbe y ese sábado aclaró que estaba ahí porque el gobierno del panista Marco Antonio Adame "alienta las inversiones". No explicó por qué apoyaba una construcción en litigio que no es sustentable. En entrevista vía telefónica el ingeniero Javier Aranda de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que, pese a las gestiones municipales, la Conagua no ha autorizado la extracción de agua. Las 280 casas de Las Canteras carecen de líquido. El presidente municipal. Miguel Ángel Rabadán, anfitrión de la reunión, es fiel intérprete del estilo PRD. Se adorna con grandes conceptos que ignora como gobernante. En público y en privado, Rabadán reconoce que hubo irregularidades en el cambio de uso del suelo, pero protege a la empresa negándole por escrito interés jurídico o legitimidad a los vecinos, insistiendo en que la licencia fue concedida de acuerdo a derecho y rehusándose a fincar responsabilidades contra quien autorizara el cambio en el uso de suelo: el presidente municipal interino Alejandro Cruz. El candidato ausente. El perredismo de Jiutepec se encuadra en la corriente Movimiento Democrático Morelense que encabeza el senador Graco Ramírez, quien está en campaña para la gubernatura de Morelos. Graco también reconoce que hubo irregularidades en el proceso pero no hace nada por importunar a los poderosos desarrolladores o por hacer que su grupo respete el ideario perredista. No respondió a la petición de entrevista. Jiutepec forma parte del desastre urbanístico

nacional documentado por varios especialistas en la Reunión Nacional de Vivienda (León, Guanajuato, 20 de agosto de 2010. Las ponencias en www.sergioaguayo.org). Jiutepec es también otra evidencia del naufragio del PRD. En su Declaración de Principios y en su Programa de Acción glorifican a los "movimientos ambientales", al "desarrollo sustentable", a la planeación urbana "integral, incluyente y democrática", a la "construcción de viviendas y edificios que no dañen el medio ambiente", etcétera. Nada de eso se cumple en Jiutepec y otros espacios gobernados por el PRD. En este caso la única esperanza de los vecinos está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El ejidatario. En los últimos minutos de la reunión del sábado 21 de agosto, tomó la palabra un representante del ejido Cliserio Alanís e informó que en la Sierra Montenegro (Área de Protección Natural) invasores profesionales están talando bosques, lo que los afecta. Pidió el desalojo. El alcalde balbuceó excusas y lo remitió al gobierno del estado. El campesino se irritó y advirtió: "Los de Cliserio Alanís somos pacíficos pero ya nos estamos cansando. Si un día de éstos quemamos esas casas, no digan que no les avisamos". Materiales sobre urbanismo y comentarios en www.sergioaguayo.org (Twitter: @SergioAguayo). En la búsqueda de información colaboró Rodrigo Peña González.

FECHA: 01-12-2010

Sobre Guanajuato Ciudad de México A la memoria de Rafael Cordera Campos, mexicano ejemplar.

El domingo 5 de diciembre la ciudad de Guanajuato tendrá un plebiscito sobre un polémico fraccionamiento que condensa la lucha entre el urbanismo salvaje y la defensa del ambiente y el entorno. Las "plazas" no sólo se disputan a balazos; en ellas se vive un conflicto de baja intensidad porque uno de los mejores negocios del siglo XXI es "desarrollar" un pedazo de tierra cercano a una ciudad o vía de comunicación. Se compra barato, se acepta la voluntad de los funcionarios, se obtiene el permiso para construir y fluyen los créditos que reparten de manera indiscriminada el Infonavit y el Fovissste, cómplices (¿involuntarios?) de la corrupción. Poco importa si el desarrollo cuenta con agua, drenaje o vialidades o si se destruyen manglares, bosques o campos de cultivo. En una historia común hay especificidades. La muerte de las ideologías. En julio de 2009 el candidato del PRI y del PRD, Nicéforo Guerrero, sacó al panismo del gobierno municipal de Guanajuato. Al año ya se había desplomado la transparencia en 43% (índice del Instituto Mexicano para la Competitividad) y el cabildo le había concedido a la Constructora Azacan la factibilidad en el cambio en el uso de suelo de 38 hectáreas del cerro de la Bufa y los Picachos, signo de identidad de una ciudad enamorada de su historia. La mitad del terreno servirá para construir 893 viviendas de 160 metros cuadrados; el resto se dedicará a otro tipo de construcciones. Para legitimar un vulgar fraccionamiento los "desarrolladores" lo bautizaron como Parque Cultural San Ignacio. El guión se ha repetido miles de veces. La constructora propiedad de Alejandro Marcocchio Rodríguez primero compró las hectáreas por donde pasaría una carretera de acceso a la ciudad, la vía Diego Rivera, que ellos mismos construyeran después de recibir una concesión oficial. Un caso típico del "capitalismo de cuates". La rabia ciudadana. En Guanajuato se vive con intensidad el "amor al terruño" y el fraccionamiento mancilla un paisaje y agita a una sociedad orgullosa de su pasado. Una parte del Parque Cultural afectará la celebración del Día de la Cueva que desde 1616 se realiza cada 31 de julio para celebrar a San Ignacio de Loyola, el patrono de la ciudad. La protesta brotó de diversos frentes y se ha expresado en demandas legales, marchas y foros aprovechándose, por cierto, de las nuevas tecnologías. Quieren defender las tradiciones pero también evitar que, una vez consumado el

primer cambio de uso de suelo, se desate la típica epidemia de urbanizaciones que en este caso devastaría el entorno de una ciudad declarada en 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Las autoridades reaccionaron como siempre: indiferencia, descalificación y asilamiento de los críticos acompañados de elogios a una obra que traerá progreso, inversiones y empleos. También recurrieron a un recurso poco común. Los usos de la democracia participativa. En septiembre, el ayuntamiento priista- perredista solicitó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la organización de un plebiscito para someter su decisión a la aprobación o el rechazo ciudadano. Se realizará el próximo domingo, pero lo más probable es que el plebiscito no dirimirá el conflicto porque la Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato es muy eficaz en frenar la participación ciudadana. Para que los resultados de un plebiscito sean obligatorios tendría que votar 50% de los inscritos en el padrón y que un 60% de ellos lo hagan en un mismo sentido. Las moralejas. Me resultó imposible encontrar evidencia de que este cambio de uso de suelo se deba a las corruptelas usuales en la especulación urbana. Es, sin embargo, indudable que la alternancia ha servido en un buen número de casos para afean el paisaje urbano y destrozar el ambiente. La ciudadanía ha reaccionado, es cierto, y en algunos casos ha podido frenar la depredación. Por lo general adolece de las limitaciones asociadas con un cortoplacismo monotemático que les impide corregir las distorsiones de fondo. En Guanajuato tal vez salven el cerro de la Bufa y los Picachos pero la solución de fondo está en la vigilancia permanente y especializada de los gobiernos locales que, en la mayoría de los casos, sólo piensan en el salario alto y el negocio fácil. En tanto eso no suceda los cambios en el uso de suelo seguirán siendo una de las actividades más rentables y nocivas para el bien común. La miscelánea Murió José Álvarez Icaza, un hombre bueno y eficaz a la hora de hacer el bien. A reserva de una reflexión más amplia tomo prestadas unas líneas publicadas por Francisco Gómez Maza en su blog: "'Pepe' llegó a su meta sin dejar pendientes, sin acumular facturas que pagar, con la plena satisfacción del hombre que a su paso por el mundo material deja huellas, en un camino que conscientemente decidió caminar". Descanse en paz el amigo y maestro. www.sergioaguayo.org Delia Sánchez del Ángel hizo el trabajo de campo y la recopilación de información.

FECHA: 08-12-2010

Garza y Poiré Ciudad de México Tiempos aciagos para críticos y disidentes.

El gobierno de Felipe Calderón y sus aliados coquetean con la tentación autoritaria de imponer su versión sobre la guerra al narco. En los altos círculos están convencidos de ir ganando la guerra. Su fracaso, piensan, está en la forma de comunicarlo. La mejor forma de que acallaran las críticas sería apropiarse del método cartesiano y recurrir a la razón y la evidencia. Pues no. Lo más común ha sido la indiferencia frente a los hechos que los contradicen, y a últimas fechas están cayendo en la tentación de intimidar a quienes cuestionan su visión del mundo. Alejandro Poiré Romero es un joven de 39 años con historial académico impresionante y capacidad para dialogar con los diversos. Harvard y el ITAM, sin embargo, no lo prepararon para rechazar los nombramientos peligrosos. Ya le dio un raspón a su historial al convertirse, en mayo de 2009, en subsecretario de Gobernación para ¡Población, Migración y Asuntos Religiosos! temas bastante alejados de su historial. Lógicamente, en lugar de meter orden en el corrupto Instituto Nacional de Migración o aprenderse los nombres de los obispos que integran el Episcopado Mexicano, se dedicó a asesorar políticamente al Presidente e impulsó - sin éxito- la cédula de identidad. En agosto pasado fue ungido como secretario técnico del

Consejo Nacional de Seguridad y como vocero del Presidente para esos temas. Los derrapones son frecuentes. Don Alejo Garza era un ganadero en Tamaulipas. Los llamados Zetas le exigieron su rancho; se negó y prefirió morir defendiendo lo suyo. Él solo enfrentó a 30 sicarios, mató a cuatro e hirió a dos antes de exhalar el último suspiro. Su gesta cautivó al país y al mundo durante varios días porque toca la esencia del Estado. Dicen los clásicos de la ciencia política que en el pacto social los gobernados aceptan someterse a los gobernantes porque éstos proporcionan seguridad. ¿Cumple el gigantesco aparato estatal mexicano con ese requisito mínimo? Don Alejo obsequió a las autoridades una oportunidad para lanzar un mensaje coherente, convincente, cartesiano que combatiera la tentación ciudadana de armarse para enfrentar la barbarie. No lo hicieron. Fracasarán aquellas mentes cándidas que busquen pronunciamientos o noticias sobre el caso del ganadero en las páginas de la Presidencia, Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y la Procuraduría. Sólo dos integrantes del gabinete emitieron unas parcas opiniones: Genaro García Luna declaró que el Estado debe proteger a sus ciudadanos para evitar que la ciudadanía recurra a decisiones tan extremas. Poiré, por su parte, reconoció el valor de don Alejo pero "pidió a la ciudadanía que hagan sus denuncias cuando sean víctimas de algún delito para evitar otro caso como éste" (Hoy por Hoy, en W Radio, 25 de noviembre de 2010). Desconcierta y entristece un argumento tan pobre en labios de un funcionario poseedor de un intelecto tan bien equipado. "Mi papá nunca confió en las autoridades", declaró Sandra, la hija de don Alejo. Una desconfianza lógica porque según una nota de Adriana Flores para Milenio -el diario que le dio más seguimiento- Garza Tamez denunció lo que estaba pasando "sin que ninguna autoridad le hiciera caso" (24 de noviembre de 2010). La misma experiencia hemos tenido millones de mexicanos cuando denunciemos asaltos, amenazas o delitos a autoridades de cualquier nivel. No pasa nada, absolutamente nada y ése es uno de los motivos por los cuales crecen las versiones de que algunas partes del territorio reúnen las características de Estado fallido. Cuando Poiré rechaza las filtraciones de WikiLeaks diciendo que el "Estado mexicano está plenamente vigente y en control del territorio", uno se pregunta sobre la experiencia mística que lo está llevando a ignorar la evidencia y a refugiarse en la fe. Ése es el caldo de cultivo que está impulsando a algunos funcionarios a recurrir, apoyándose en sus aliados, a las presiones, los hostigamientos o las represalias contra quienes disienten con evidencia o razones. Ése es un marco explicativo tras los ataques contra Reforma y Proceso. Miden el patriotismo por el respaldo a la versión calderonista de la guerra y exigen hablar bien de México. Si don Alejo y la vida diaria los contradice, pues es problema de la realidad. Olvidan que con los monólogos se pavimenta el camino al planeta de los solitarios. La miscelánea En la columna de la semana pasada relaté la resistencia ciudadana a la construcción de 893 casas en el Cerro de la Bufa que domina la ciudad de Guanajuato. En el plebiscito realizado este domingo ¡84 por ciento dijeron que No! Como sólo participó 13 por ciento de los inscritos el resultado no vincula al ayuntamiento priista-perredista que encabeza Nicéforo Guerrero. Una victoria simbólica para los hartos con el urbanismo salvaje que destruye la naturaleza. www.sergioaguayo.org Rodrigo Peña González colaboró en la recuperación de la información

FECHA: 12-01-2011

Urbanismo suicid Ciudad de México "¡Basta de sangre!".

Urge ser integral en la guerra contra el crimen organizado. El gobierno federal podría, por ejemplo, controlar por medio del Infonavit y el Fovissste el urbanismo salvaje, uno de los nutrientes del crimen organizado. En las guerras modernas el poder de fuego es sólo una de las variables. En el ya famoso diálogo entre Julio Scherer García e Ismael El Mayo Zambada publicado en Proceso, este último lanza la pregunta: "El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos?". Responde con un fatalismo interesado pero realista: "el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción" que, añadido, interactúa con una cultura de la violencia que se desborda horrorizándonos. ¿De dónde sale tanto odio, tanto impulso destructivo? Para responder estas preguntas sirven los académicos y una importante dependencia federal cuya identidad se revela al final del texto- comisionó en 2009 estudios en varias ciudades para tener un "primer acercamiento a los posibles factores" que detonan la "violencia social y de género", porque si las "violencias son construcciones sociales, económicas y culturales", en la medida en la que se les conozca será "posible realizar intervenciones para prevenirlas". De esos estudios rescato las principales conclusiones de los trabajos sobre Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad Juárez coordinados por Greta Papadimitrou, Guadalupe Rodríguez Gómez y Laurencio Barraza respectivamente (para consultar los trabajos ir a www.sergioaguayo.org). El urbanismo mexicano reproduce las reglas del capitalismo de compadres: el sector privado impone la distribución geográfica y la modalidad de los nuevos asentamientos porque hay una privatización formal e informal de la tierra, de la vivienda y de la política urbanística. El Estado, o lo que queda de él, es un alcahuete al que sólo interesan el dinero que recibe por cambiar el uso de suelo o recibir obras incompletas o maltrechas. El desorden se facilita por la rotación permanente de gobiernos locales (no hay reelección), por la degradación ética de todos los partidos y por la miopía de la autoridad federal. Ejemplo: en la última década, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha entregado más de tres millones de créditos y en sus documentos presume de "sustentabilidad", de "construcción de tejido social" y de "respeto al medio ambiente". Es una retórica vacía de contenido porque las investigaciones aquí citadas muestran un panorama diferente. En nuestras ciudades hay dispersión urbana que reproduce la segregación económica y social, ciudades-dormitorio donde no se convive y espacios públicos despersonalizados, descuidados o abandonados. Tierra de nadie en la cual es notoria la escasa presencia de las instituciones del Estado. La alternancia no ha construido el capital social que hace funcionar la democracia; ha hecho jirones el que existía. El desarrollo económico, cuando lo hay, tampoco ha resuelto las diferencias; las ha acentuado. En suma, salvo contadas excepciones, las ciudades mexicanas no se disfrutan, se sufren. Los vacíos se han llenado con nuevos actores sociales, entre ellos el crimen organizado. Su presencia es mayor donde tenían presencia (Guadalajara y Juárez) y donde hay dinamismo económico y nudos de comunicación. Ciudad Juárez es un caso paradigmático. Ahí llegaron las maquiladoras en los sesenta, pero el auge de empleos sólo deterioró el tejido social. El PAN ganó la gubernatura en 1992 pero la alternancia sirvió de poco. Una de las investigadoras, Delia Brenda Acosta Beltrán incluso sostiene que la "desigualdad urbana" ha sido un mayor detonante de la delincuencia que la pobreza. Hugo Almada escribe, por su parte, sobre las viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, una realidad generada por la "facilidad para la obtención de créditos y la sobre-producción de

vivienda de interés social" con materiales de ínfima calidad y sin infraestructura. El resultado es que "unidades enteras de estas viviendas parecen hoy pueblos fantasmas". Las investigaciones realizadas por INCIDE Social fueron auspiciadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación cuyo titular, Francisco Blake Mora, es el secretario ejecutivo del gabinete de seguridad que debería ordenar ya al Infonavit y al Fovissste que impongan condiciones más estrictas a los "desarrolladores". Ignorarlo es perpetuar el urbanismo suicida. La miscelánea Murió el multifacético Ario Garza Mercado de El Colegio de México. Como maestro nos enseñó la metodología de la investigación, como bibliotecario sentó cátedra y como ser humano fue excepcional. Tomo prestados algunos adjetivos de un texto de Heshmatallah Khorramzadeh: Ario fue riguroso y disciplinado, tierno y apasionado, pícaro y alburero. Difícil olvidarlo. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: Sergio Aguayo Quezada. Colaboró Rodrigo Peña González.

FECHA: 20-04-2011

Los turistas Ciudad de México Un turista ejemplar prepara con enorme cuidado sus desplazamientos; sólo así acumula conocimientos y vivencias.

El turista común y corriente, por el contrario, flota sobre las realidades sin querer entenderlas ni relacionarse con ellas; ¿qué hacer para que nuestros gobernantes dejen de comportarse como turistas de tercera? Un ejemplo claro de lo anterior han sido las reacciones y el manejo poco brillante de gobernantes y políticos ante la decisión de quitarle a Acapulco el Tianguis Turístico que se realizaba en el puerto desde hace 36 años. La Secretaría de Turismo federal (panista) anunció súbitamente que el dichoso tianguis sería itinerante. Al alcalde (priista) le salió la estirpe guerrera y convocó a taxistas y lancheros a movilizarse por tierra y mar; no sería extraño que pronto los veamos en el Distrito Federal instalados en guapachoso plantón mientras regalan a transeúntes y curiosos miles de cocos borrachos. El perredismo, por su parte, ya condenó con adjetivos la afrenta al gobierno (perredista) de aquel estado, mientras que los agitados estados de Durango, Nuevo León y Quintana Roo piden que el tianguis se haga en sus territorios. Todos ellos se desviven en elogios al benéfico turismo. Ninguno bosqueja algún proyecto para reducir los niveles de violencia que están ahuyentando a los visitantes (según encuesta de Reforma publicada el 19 de abril de 2011, 59% de viajeros temen usar las carreteras durante esta Semana Santa). Tampoco tienen un proyecto de largo plazo y la norma, cuando gobiernan, es hacer algo para destruir los atractivos naturales de este país. La tolerancia oficial hacia el urbanismo salvaje devasta manglares, agota o contamina ríos y arroyos, invade zonas protegidas. Morelos tiene vocación para el turismo por su ubicación y sus recursos naturales. En los últimos años, las autoridades de los tres niveles compiten en la destrucción del medio ambiente. La fórmula que han encontrado son los cambios de uso de suelo que permiten las construcciones irracionales e ilegales que violentan las reglas más elementales del urbanismo. En un par de columnas escritas durante el último año narré la decisión del cabildo perredista de Jiutepec de cambiar el uso de suelo, lo que permitió la construcción de 280 casas en un terreno apto para 47. También conté sobre la oposición de vecinos -entre los cuales me encuentro- al fraccionamiento La Cantera y las demandas jurídicas contra la decisión del Ayuntamiento. El forcejeo ha tomado rumbos inesperados. Los vecinos solicitaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) que suspendieran el otorgamiento de créditos para adquirir viviendas en La Cantera hasta que se decida el fallo del

juicio actualmente en curso. Es una forma de proteger la inversión de los trabajadores. El Infonavit, que encabeza Víctor Manuel Borrás, aceptó la petición lo cual abre un resquicio para la corrección de aberraciones; el Fovissste, dirigido por Manuel Pérez Cárdenas, se ha mostrado reticente porque para ellos basta con que la presidencia de Jiutepec autorice el fraccionamiento. Tras esta disparidad está la ausencia de una estrategia federal de largo plazo para darle integralidad y viabilidad al turismo en Morelos. Andrés Manuel López Obrador visitó hace poco Jiutepec y compartió la mesa de honor con el presidente municipal perredista que ha conseqüentado y tolerado empresas depredadoras del medio ambiente (y cuya renuncia pidió Javier Sicilia). López Obrador actúa de esa manera porque su prioridad es la candidatura a la Presidencia y a ella somete la atención a problemas cotidianos de las comunidades. ¿Y qué decir de Felipe Calderón que se va de turismo religioso al Vaticano en lugar de visitar San Fernando, Tamaulipas, como sería su deber? (véase de Roberto Blancarte, "Nuestro presidente católico", Milenio, 19 de abril de 2011). Al comportarse como turistas frívolos, nuestros gobernantes y políticos marginan a la sociedad que desesperada busca soluciones de cualquier tipo. Quienes viven en Petatlán, Guerrero, optaron por "sacar a la calle al Padre Jesús, el 'Tata Chuy', cuya imagen 'milagrosa' estuvo durante 47 años sin salir de su santuario". Buscan en el cielo lo que los partidos les niegan: restablecer la "paz en Guerrero" y regresar "el turismo a la región" (El Universal, 17 de abril de 2011). ¿Será necesario que saquemos a peregrinar fotos de Manuel Gómez Morin, Lázaro Cárdenas del Río y Valentín Campa para ver si sus herederos mejoran como gobernantes? Sería simpático pero ineficaz. Mejor presionemos a favor de la legalización de la marihuana, reunamos firmas para pedir a Washington un embargo a la exportación ilegal de armas de asalto a nuestro país y participemos en la marcha del próximo 8 de mayo contra la inseguridad. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró en la búsqueda de información Rodrigo Peña González

FECHA: 13-07-2011

Porros yucatecos Ciudad de México El ayuntamiento priista de Mérida aprueba una obra vial; vecinos y organismos ciudadanos se inconforman y obstaculizan con un plantón la obra; golpeadores ligados al municipio los agreden.

El urbanismo salvaje. La especulación urbanística se hace cambiando el uso de suelo o construyendo obra pública cara e innecesaria; se detecta en que los trámites son inusualmente rápidos, en una opacidad superior al promedio y en que no se consulta a la ciudadanía afectada. La historia de un paso deprimido en Mérida es paradigmática. El 4 de mayo se presenta en el Cabildo de Mérida la obra y ese mismo día se aprueba sin conocerse el proyecto completo. Cinco días después el director de Obras Públicas, Antonio Duarte Briceño, "dijo desconocer cuánto ha invertido el Ayuntamiento de Mérida en la realización del preproyecto que se licitar[ía] así como el monto base que saldr[ía] a licitación". El 1o. de julio se anuncia el nombre de la empresa ganadora que inicia la construcción tres días después sin difundir la manifestación de impacto ambiental o la licencia de construcción. Los afectados e interesados no son consultados y surge la oposición. Entre otros se han expresado en contra el Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, el Frente Cívico Familiar, la Canaco, el Colegio Yucateco de Arquitectos y la Coparmex local. Las autoridades a veces atienden estas protestas, generalmente las ignoran y en las grandes ciudades es raro que las repriman. Mérida fue la excepción. El porrismo posmoderno. Las comparaciones ayudan. El 10 de junio de 1971, en la Ciudad de México, pandilleros usaron varillas y armas de fuego para golpear y matar estudiantes; en Mérida sólo utilizaron guantazos,

patadas, botellazos y vallas metálicas. Hace 40 años la agresión duró cinco horas; en esta ocasión 12. En ambos casos hubo pasividad policiaca que en Mérida fue justificada así por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco: "asumo la responsabilidad de haber tomado la decisión de no meter a la policía porque estaban muy exacerbados los ánimos y cuando entra la policía a veces enardece más a los que están en este momento en conflicto" (noticiero de la Cadena Rasa conducido por Mauricio Espinoza y Wendy Aguayo, el 5 de julio). El despropósito es monumental porque la principal función del Estado es mantener el "monopolio legítimo de la violencia". El pismo gubernamental permitió que hubiera numerosos golpeados, 18 de ellos, cuatro de gravedad, ya presentaron demanda penal. Ni en 1971 ni en 2011 hubo institución estatal que defendiera a los agredidos. La diferencia es que ahora sí existen formalmente. Según el corresponsal de Reforma Pedro Diego Tzuc, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán recibió a un representante del movimiento opositor ¡más de 24 horas después de la agresión!; emitió un boletín timorato y medidas cautelares tardías y se negó a responder las preguntas de Reforma sobre el tema. El presidente de esa Comisión, Jorge Victoria Maldonado, fue tan pasivo como la gobernadora. En los sesenta la Cruz Roja era cómplice de la represión, en Mérida no atendió a los heridos porque "no tenían permiso de la policía" para ingresar a la zona de conflicto. La autoprotección ciudadana. Ante tanta indefensión, la sociedad se ha visto obligada a defenderse generando y difundiendo información. En ello ha sido fundamental el papel de medios como el Diario de Yucatán, Milenio, Canal 10 y Artículo 7. Gracias a ellos podemos conocer todos los detalles del caso. Así nos enteramos de que el líder de los porros es Carlos Herrera Chalé, alias Calín, quien además de trabajar en el rastro municipal -fue despedido hasta el lunes 11 de julio- es líder de Acción Juvenil de la CTM y administrador de cuatro prostíbulos. Tiene como lugartenientes a El Mimoso, El Moy, La Momia y El Hassan. Carlos, o Calín, no es un cualquiera. En junio se fotografió con la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara (PRI) y con personalidades como el líder nacional de los ferrocarrileros, Víctor Flores. Las autoridades priistas aseguran que se trata de un enfrentamiento atizado por el conflicto PANPRI. En los videos difundidos (uno de ellos puede verse en www.sergioaguayo.org) es obvio que los porros golpearon a ciudadanos que resistieron pacíficamente y que fueron los únicos golpeados. Al día de hoy continúa la construcción del paso deprimido mientras los opositores exigen transparencia, denuncian y meten demandas ante un Poder Judicial impredecible y corruptible. Además de la violencia criminal ahora regresa el porrismo ligado a gobernantes que promueven o toleran -tal vez porque se benefician- un urbanismo salvaje que destruye nuestras ciudades. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: [@sergioaguayo](https://twitter.com/@sergioaguayo); Facebook: SergioAguayoQuezada Luz Ramírez González colaboró en la recuperación y ordenamiento de la información que proviene de los siguientes medios: Reforma, Diario de Yucatán, Milenio, Reporteros Hoy, Primera Plana, Grupo Rivas, Sipse, Yucatán Hoy, Canal 10, Artículo 7, Cadena Rasa y Por Esto!

FECHA: 10-08-2011

'Allons

enfants.

Ciudad de México Lo común es que nuestros gobernantes veneren la varilla y el cemento aunque con ello ultrajen pasado y arrasen futuro. Puebla le entró al urbanismo salvaje. Para celebrar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle decidió construir el Viaducto Zaragoza: en tres kilómetros y medio se gastará 486 millones de pesos (cálculo inicial). Quiere inaugurarlos el 5 de mayo de 2012. Vecinos y académicos se unieron en el movimiento

"La otra Batalla del 5 de mayo". Protestan por la opacidad del proyecto, lo incompleto del expediente técnico y la falta de información sobre los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales de la construcción. Ilusos, quieren que la racionalidad y la civilidad regule su herencia histórica y su vida diaria, y se rehúsan a rendir tributo a su majestad el coche. Como el Viaducto desembocará en el centro, ven amenazada la traza renacentista. Les preocupa que Puebla pierda el nombramiento que tiene desde 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tienen como modelo negativo a Dresden, Alemania, que perdió el galardón en 2009; la UNESCO se lo retiró por construir un puente vehicular que obstruye la vista del Valle del Elba. El gobernador Moreno Valle tardó poco en descalificarlos con gran rudeza: "hay pequeños grupos de presión que, por alguna razón, quieren oponerse al desarrollo de Puebla [...] Si alguien cree que va a poder, a través de la presión, detener el crecimiento y desarrollo de Puebla, les digo que están equivocados, que se equivocaron de gobernador porque conmigo se van a enfrentar". En lugar de amenazar, Moreno Valle debería informar para cumplir con la promesa que firmó el 14 de julio de 2010: su gobierno, dijo, sería "eficaz, transparente y justo". Un año después defiende una obra típica del urbanismo depredador y salvaje: es cara, de dudosa utilidad y es profundamente opaca, además de no haberse consultado con la ciudadanía interesada. En la página de internet del gobierno poblano sólo aparece, y después de mucho buscar, una Ficha Técnica con 118 palabras ¡para una obra de 486 millones de pesos! Estamos ante una "nini" urbanística: ni en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 ni en la página electrónica del gobierno estatal aparece información que la justifique. Si la obra avanza a marchas forzadas es porque la dependencia con autoridad para frenarla se hace la desentendida. Para una funcionaria de Comunicación Social del gobierno estatal "no necesita permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia" (entrevista telefónica) con lo que se confirmaría la falta de autorización. Un perito de la delegación Puebla del INAH declaró que esa dependencia apenas está evaluando si avala o no el Viaducto. Cuando se decidan tal vez sea demasiado tarde. Moreno Valle llegó al cargo en 2010 por una alianza del PAN, el PRD, el Panal y Convergencia. Hoy ninguna dirigencia partidista opina sobre el Viaducto; sólo lo hizo Leticia Quezada, diputada federal de la corriente Bejarano-Padierna, quien presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente. La opinión más articulada ha sido ¡la del PRI poblano!: "Una obra de esta magnitud debe tener todos los permisos que establece la ley", declararon para luego hacer un llamado a despejar las dudas transparentando el "proyecto ejecutivo" y terminar rechazando "politizar esta obra" (jamás he entendido ese llamado en boca de quienes todo lo politizan). Sobre los opositores ha caído la aplanadora integrada por gobernantes y empresarios nacionales y extranjeros (el Viaducto lo construyen GH Anderl Construction and Consulting, S.A. de C.V., Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe, S.A. de C.V.). El 31 de julio los inconformes hicieron una clausura simbólica y en la obra encontraron a un ingeniero francés "alto y corpulento, portador de un casco impecable [y de] gafas oscuras de diseño", que exigía a los policías, en un español más o menos rudimentario, "¡quítenlas de aquí porque yo tengo permisos para excavar!". Se refería a la antropóloga que impedía el avance de un trascabo mientras gritaba "¡enséñeme los permisos!" y a la historiadora del arte quien cantaba La Marsellesa, el himno nacional francés. Empezó con el "Allons enfants de la Patrie" y recalcó cada sílaba cuando llegó a la belicosa frase "Aux armes, citoyens", "¡A las armas, ciudadanos!" (Martín Hernández Alcántara en La Jornada de Oriente, 1o. de agosto de 2011). Es más apropiado llamar "¡A las escuelas de idiomas, mexicanos!"; llegan tantos extranjeros a expoliarnos en la construcción, la minería y la banca que tendremos que protestar en varios idiomas. Por otro lado, si "afoxarse" es sinónimo de claudicación, entristece observar el "afoxamiento" de un gobernador que se comprometió a ser diferente. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Rodrigo Peña González hizo el trabajo de

campo y recopiló y sistematizó la información. Luz Ramírez González estableció paralelismos con otras ciudades.

FECHA: 21-09-2011

Minas y verdes Ciudad de México La disputa parece menor e intrascendente, pero va al núcleo de los grandes problemas nacionales.

Por tanto, expongo y propongo una solución. La empresa y el profesor. El ministro del medio ambiente de Canadá, Peter Kent, declara que ya "operan [en México] 2 mil 600 mineras canadienses" que, según el investigador Juan Carlos Ruiz Guadalajara, tienen concesionado casi 20% del territorio nacional. Para el funcionario canadiense la gran mayoría son socialmente responsables y quienes las critican exageran. Ruiz Guadalajara es profesor-investigador de El Colegio de San Luis (Colsan) desde 2000. También forma parte del Frente Amplio Opositor que tiene años encarando a la empresa canadiense New Gold-Minera San Xavier que busca oro en el cerro de San Xavier. El profesor sabe mucho sobre el tema y sobre la devastación ambiental causada por las mineras canadienses en América Latina que se aprovechan de autoridades laxas y jueces maleables. El actual director de New Gold en México, Armando Ortega (ex subsecretario con Vicente Fox) se hartó con el investigador y para acallararlo escribió una carta el 28 de julio a Isabel Monroy, presidenta del Colsan, con copia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del cual es integrante el profesor. Ortega acusa al investigador de hacer "imputaciones gravísimas [sin tener] el pudor de probar[las]"; son los "excesos calumniosos" de "activistas estridentes" totalmente impropios en un académico. Por tanto, el empresario le pide al Colsan y al SNI esclarecer su "posición". Consulto telefónicamente a la presidenta del Colsan quien aclara que el profesor Ruiz Guadalajara hace "muy bien su trabajo académico", tiene libertad de pensamiento y no es función de la institución reconvenirlo. Tiene razón, si el investigador no demuestra sus afirmaciones la empresa tiene la vía legal. En el pasado Gobernación tenía metidos a los académicos en una Torre de Marfil para que no opinaran sobre los acontecimientos nacionales; en la actualidad los poderes fácticos quieren regresarnos a la dichosa Torre. (Para que el lector valore a las fuentes véase www.sergioaguayo.org en donde está la carta de la empresa y el CV del profesor). Las implicaciones del conflicto. El drama de México es la ausencia de las instituciones. Por todo el país han ido surgiendo grupos ciudadanos que hacen lo que pueden para frenar el urbanismo y la minería salvajes. Es totalmente natural que así sea porque el medio ambiente es una de las grandes preocupaciones mundiales. Los opositores a las operaciones de New Gold en San Luis Potosí tienen años tocando en todas las puertas para explicar su causa. Se acercaron al Partido Verde Ecologista de México. Hicieron antesala en las oficinas del senador Arturo Escobar que expresó, por medio de un asistente, que "el señor está enterado e interesado en el tema, déjenme información y él se comunicará con ustedes". Nunca lo hizo, por supuesto. Los verdes potosinos los elogiaron en privado pero tampoco hicieron algo para respaldar una lucha claramente ambiental. Desde hace años me he interesado por un desarrollo que respete la naturaleza y sigo sin encontrar al ecologista serio que diga una palabra de elogio hacia el compromiso del PVEM con esa causa. En los medios impresos lo más frecuente son las críticas. Su simulación ya provocó su expulsión de la comunidad mundial de partidos ambientalistas. Lo inquietante es que nadie se preocupa por corregirlo. El enojo, cada que sabemos los centenares de millones de pesos que reciben los verdes de nuestros impuestos, da paso a la resignación y el derrotismo. Greenpeace está celebrando su 40 aniversario. En México cuenta con 30 mil socios donadores que le permiten tener un presupuesto aproximado

de 26 millones de pesos anuales. Es una organización seria, transparente y respetable. Su consejo debería aprobar una campaña para exigirle al Instituto Federal Electoral que revise con mayor energía la forma en que los verdes oficiales gastan el dinero y cumplen con lo que está incluido en los estatutos. Se defendería mejor al medio ambiente si existiera un partido serio. La simulación nos está aniquilando. Mientras Canadá nos impone visas ofensivas, miles de sus empresas se llevan el oro y la plata de las entrañas patrias y combaten e intentan censurar a sus críticos. Todo ello es posible porque las instituciones simulan o se ausentan. La sociedad civil no puede sustituirlas; es más fructífero centrar sus esfuerzos en exigirles que cumplan con la misión que les asigna la arquitectura democrática. LA MISCELÁNEA Entretanto, otra corriente de la sociedad civil batalla en el Congreso para lograr una reforma política que oxigene una democracia alicaída. Del Senado salió una buena minuta de reforma pero los diputados se hacen los remolones y quieren darnos una "reformita". No entienden la magnitud de la crisis. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Francisco Lenin Figueroa Guevara.

FECHA: 02-11-2011

'Empezamos tarde Ciudad de México Un amparo arropó centenares de construcciones ilegales en el Distrito Federal entre ¡1998 y octubre del 2011!

Sirva el hecho para hacer un balance sobre urbanismo y gobiernos perredistas. El jueves 20 de octubre, Reforma publicó una investigación de Pilar Gutiérrez. Ciber México, representada por un destacado profesor de la Universidad Panamericana, Francisco José Ibáñez Rivero, obtuvo un amparo en 1998. Lo utilizaron mañosamente para proteger construcciones que violaban el uso del suelo en diferentes delegaciones. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Felipe Leal, reconoce que el amparo fue utilizado; de acuerdo con la consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, "solamente" fueron 120 veces. Sorprende la magnitud del abuso, que podría crecer a medida que conozcamos lo que realmente sucedió. Los cambios en el "uso del suelo" son un barómetro de la corrupción y de las relaciones entre gobierno y ciudadanía. Militantes de todos los partidos son cómplices, vasallos, de "desarrolladores" que han encontrado una veta de oro en destrozando los trazos urbanos. La devastación es evidente en las colonias popof o en los barrios populares de Cuernavaca, Guadalajara, Cancún, etcétera. El lunes 31 de octubre converso telefónicamente con Leticia Bonifaz, la consejera jurídica del Distrito Federal. Es una funcionaria a la que respeto por su compromiso y eficiencia. Le señalo lo inconcebible de que un amparo se hubiera usado durante los 13 años que lleva gobernando el PRD la capital sin que ningún funcionario frenara el abuso. Me explica que ella recibió instrucciones de Marcelo Ebrard de ocuparse del tema hasta diciembre de 2010 y que obtuvo evidencia concreta sobre el mentado amparo de un grupo de vecinos inconformes encabezados por Paola Arizpe (presidenta del Comité Ciudadano en Jardines del Pedregal) en septiembre de 2011; al mismo tiempo que Reforma. Enumera lo que están haciendo para enfrentar el desorden pero termina reconociendo que, en efecto, como gobierno capitalino, "empezamos tarde". Y sí. Empezaron 13 años tarde a combatir uno de los carcinomas que ha ido destruyendo al PRD en la capital. Por denuncias públicas no ha quedado. En marzo de 2010 el contralor general del GDF, Ricardo García Sáinz, reconoció las complicidades entre funcionarios y empresarios en los cambios de uso del suelo: "vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones" (Reforma, 9 de marzo de 2010). La Secretaría del Medio Ambiente, por su parte, advierte con frecuencia las invasiones de suelo protegido. Marcelo Ebrard quiere ser

Presidente y justificadamente presume de los logros de su gobierno. El uso del suelo es uno de sus flancos débiles. Permitió que siguiera el saqueo urbanístico que entre otros puntos ha golpeado el sur de la ciudad, una parte estratégica para la sustentabilidad ambiental futura. Su Supervía Poniente podrá ser una solución para quienes viven en esa ratonera llamada Santa Fe, pero tiene todos los ingredientes para convertirse en paradigma futuro de una especulación urbana, tan gigantesca como la de Ciudad Satélite en los años sesenta. La ciudadanía afectada está virtualmente indefensa. La "legalidad" mexicana es súbdita del urbanismo salvaje. Es caro, lento e impredecible defenderse en tribunales, y pocas organizaciones vecinales tienen la comprensión del fenómeno, la paciencia y el dinero para hacerlo. Los "desarrolladores", por el contrario, blindan un negocio multimillonario con bufetes especializados, con relaciones políticas y con el apetito de los funcionarios por la ganancia fácil. Lo paradójico es que la trituradora ambiental se alimenta en las laxas políticas crediticias del Infonavit y el Fovissste. Los partidos que en el papel defienden el ambiente (el Verde Ecologista) prefieren entrarle a la transa. "¿Y cuánto dinero nos va a tocar?" por cambiar un uso del suelo en Cancún, preguntaba en 2004 el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez. "¡Dos millones de dólares!", le respondía el "desarrollador" (el diálogo completo en www.sergioaguayo.org). Podrá seguir haciéndolo, si quiere, porque las autoridades electorales toleran la simulación ambiental. Habría otra medalla de oro panamericana. Dice el Latinobarómetro 2011 que los mexicanos superamos a todos en la insatisfacción con la democracia. Tenemos razones fundadas lo cual, por supuesto, repercute en las intenciones del voto. En 1988 Cárdenas arrasó en la capital: obtuvo 49% de los votos reconocidos y Carlos Salinas un lejano 27. La tendencia se está invirtiendo. Desde hace 30 años soy vecino de la Magdalena Contreras, un bastión perredista. Pues bien, según encuesta de Reforma del 25 de octubre, 35% piensa votar por el PRI y 30% por el PRD. ¿Lograrán revertir las tendencias? Una forma de hacerlo es combatiendo la corrupción en el uso del suelo. ¿Podrán, querrán, cumplirán? Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Maura Roldán Álvarez.

2012

FECHA: 18-04-2012

¿Por

la

tercera?

Ciudad de México El Partido Acción Nacional da cátedra sobre campañas de "contraste" y guerra sucia. Le funcionaron en las dos últimas elecciones presidenciales. ¿Renovará sus laureles este año? Es tradición mexicana difamar o denigrar al opositor. En 1940 grupos cercanos al partido oficial tacharon al general opositor Juan Andreu Almazán de ser un "peligro para la patria"; en 1954 los henriquistas acusaron a Adolfo Ruiz Cortines de traicionar a México sirviendo al yankee que invadió Veracruz en 1914; en 1988 bañaron de injurias y lodo a Cuauhtémoc Cárdenas. En el año 2000 subieron de intensidad los ataques. En un sólido libro, Alejandro Moreno asegura que los "comerciales y mensajes negativos" nunca habían tenido tal magnitud. Y quien los utilizó con mayor envidia fue Vicente Fox, que se excedió en la ridiculización de sus dos principales opositores: entre otros calificativos describió a Cárdenas como "sacón", "timorato" y "collón" y a Francisco Labastida como "hombrecillo", "mariquita" y "mandilón". En 2006 subieron los decibeles. El 12 de marzo Felipe Calderón desencadena una ofensiva sin precedentes contra Andrés Manuel López Obrador. Ese día las televisoras difundieron en horario estelar el spot "Ladrillos"; Antonio Solá ha reconocido que ese anuncio era la matriz de la cual nació la tesis de que Andrés Manuel era un peligro para México. Ese mensaje sería reforzado y machacado con spots, declaraciones, mensajes en internet, etcétera. Como "Ladrillos" se basaba en falsedades fue declarado ilegal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lograron que el miedo cundiera y, en parte por ello, AMLO perdió. Este año el PAN quiere refrendar su calidad de "sensei" (dícese en Japón de las personas doctas en alguna disciplina) del contraste. El 14 de abril empezaron oficialmente la ofensiva difundiendo un anuncio con la tesis de esta campaña: Enrique Peña Nieto es un mentiroso, una afirmación que ya habían fundamentado en seis boletines difundidos por el PAN entre el 15 de marzo y el 11 de abril y en una entrevista de Roberto Gil con Denise Maerker. La respuesta inicial del PRI fue ligera, como que no se tomaron en serio el ataque. Difundieron un comunicado, varios dirigentes dieron una conferencia de prensa y transmitieron un spot con el mismo mensaje: Josefina es una falsaria porque asegura haber gestionado la instalación de 3 millones de pisos firmes cuando cifras oficiales la desmienten. Al igual que López Obrador en 2006, Peña Nieto ha respondido con desdén: él no se va a "distraer en responder las provocaciones de otros partidos", él no va a "dividir a México" como lo hicieron los otros en 2006. A diferencia de AMLO en 2006, el equipo de Peña Nieto respondió muy rápido y el 16 de abril retó a la dirigencia panista a sentarse frente a una "mesa de la verdad" en donde cara a cara aclararían si Peña Nieto cumple sus promesas. Cuando enviaba este texto a la mesa de redacción, el PAN y el PRI seguían peleándose por el lugar como si buscaran excusas para evitar el trago de decirse sus verdades públicamente. Al final se dio un breve encuentro pero no se despejó el enigma de si Enrique Peña Nieto es o no un mentiroso. Según indicadores bastante serios que cité en la columna "Verbos y cifras", su gestión como gobernador del Estado de México fue bastante mediocre. Imposible anticipar el día de hoy el impacto del posible encontronazo entre el PAN y PRI debajo de algún puente mexiquense o si seguirán lanzándose fintas mientras nos aburren con sus insulsos monólogos; difícil saber si López Obrador está acertando en su decisión de ubicarse

como el candidato de la medida y la sensatez o si terminará poniéndose los guantes como el fajador que es. De todo ello dependerá que el PAN ratifique sus laureles de campeón de las campañas de contraste y del juego sucio. Tercera llamada, comenzamos. LA MISCELÁNEA Las leyes federales prohíben colgar propaganda en el equipamiento urbano (postes, semáforos, puentes, etcétera). Como hubo protestas ciudadanas, los candidatos al Senado por la capital Alejandra Barrales y Mario Delgado respondieron descolgando su propaganda y comprometiéndose a una campaña limpia. Reconforta su civilidad. El Partido del Trabajo (PT), por el contrario, se empeña en ensuciar partes de la ciudad con sus pendones. Una petición para Andrés Manuel: ¿podrías convencer a Beto Anaya, líder histórico del PT, de que cumpla con la ley y durante esta campaña nos dé un anticipo de ese "cambio verdadero" que según ellos "está por venir"? Citas: Alejandro Moreno, La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México, 2009; la entrevista con Solá está en Fernando Rudy Hiller, "En busca del voto del miedo: la construcción mediática de López Obrador como peligro para México en la campaña 2006", tesis de Maestría, El Colegio de México, 2009. El resto de citas proviene de fuentes diversas. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboraron Rodrigo Peña González y Maura Roldán Álvarez.

FECHA: 03-10-2012

Tres entrevistas Ciudad de México Para Maricarmen Vergara.

Las izquierdas se encuentran en ebullición porque están, finalmente, confrontando errores y lastres. La izquierda es notable por el fervor con el cual se autocritica. En las últimas décadas han producido miles de desplegados y pronunciamientos que incluyen diagnósticos certeros sobre sus carencias. Por ellos sabemos que viven contracturados por liderazgos carismáticos e instituciones ineficientes, que se han ido alejando de su base social y que perseveran en su legendaria impuntualidad. Los desahogos conceptuales no desembocan en correcciones de fondo. Esta vez podría ser diferente gracias a Andrés Manuel López Obrador y a su Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En una reveladora conversación con Roberto Zamarripa (Enfoque, Reforma, 23 de septiembre de 2012) AMLO se olvida de la república amorosa para lanzarse contra la mafia de los "treinta mandones" que se "creen dueños de México". No descalifica abiertamente al PRD, al PT y al Movimiento Ciudadano; lo hace implícitamente al elogiar con entusiasmo a Morena, la "organización social, política, más importante de este país" que será el ariete para "cambiar al régimen". Apalancándose en la "ética", Morena exorcizará al "influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el sectarismo". El planteamiento de Andrés Manuel es inacabado, endeble y refrescante. Inacabado porque nunca aclara cómo blindará a sus candidatos de la corrupción sistémica que rodea las elecciones. Endeble porque jamás aborda la dependencia que Morena tiene del líder carismático. Refrescante, respetable y necesario porque la izquierda y nuestro país se ahogan en la corrupción. Como si se hubieran puesto de acuerdo, el mismo domingo salió publicada una entrevista a Marcelo Ebrard en El País (23 de septiembre). El todavía jefe de Gobierno capitalino comenta sin ambages al corresponsal Luis Prados la contradicción principal: "Morena es el partido de una sola persona". En lugar de descalificar a López Obrador opta por las reglas del juego limpio y agradece la "competencia" de Morena. Su presencia, dice, será el aliciente para la refundación del PRD sobre la cual se construirá una especie de Frente Amplio a la uruguaya que hará competitiva su candidatura en 2018. Al PRD le urge un reajuste. En sus 23 años de existencia se ha quedado muy atrás del Partido de los Trabajadores de Brasil (fundado en 1980) que resolvió bien la tensión entre liderazgo carismático

e institución y supo, con la eficiencia de los gobiernos locales, pavimentar su camino hacia la Presidencia. Marcelo propone una cirugía mayor a su partido acicateado desde dentro por las tribus, desde la izquierda por Morena y desde la derecha por el PAN y el PRI. Una frase sintetiza el planteamiento de Marcelo: "Hay que construir una izquierda para gobernar, no para protestar". Los gobernadores perredistas de Guerrero y Morelos, Ángel Aguirre Rivero y Graco Ramírez, andan entusiasmados con un "corredor amarillo" que incluiría al Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tabasco. Tiene sentido el esfuerzo por armonizar políticas pero, ¿cómo resolverán las disparidades entre entidades? El PRD ha tenido éxito en el Distrito Federal pero ha fracasado en Baja California Sur, Michoacán y Zacatecas. ¿Por qué? Sostengo que la diferencia fundamental está en la consistencia del tejido social. Con todas sus deficiencias la capital tiene una sociedad mejor informada y participativa (además de ser irritantemente crítica). Unas cifras marcan la diferencia. Según la Encuesta Nacional de Valores sobre lo que nos Une y Divide a los Mexicanos (Banamex, Fundación Este País, 2010) 40% de la población mexicana tiene "muchoa confianza en la Televisión". Las variaciones entre entidades son notables. En el Estado de México 26.91% confía en las televisoras, mientras que en el Distrito Federal es un magro 4.55%. Los partidos de izquierda han hecho un esfuerzo por gobernar la capital escuchando y atendiendo a la sociedad. Reconociéndolo, hay déficits importantes en la honestidad y la eficacia de delegaciones y algunas dependencias del gobierno central y uno de los indicadores es el urbanismo salvaje. En entrevista con La Jornada (24 de septiembre) Miguel Ángel Mancera reconoce la corrupción y añade que, o la combaten ellos, o "va a venir alguien más a hacerlo". Inicia la batalla por conquistar el corazón y las prerrogativas y posiciones de la izquierda. El enfrentamiento puede ser destructivo, virtuoso o aburridamente irrelevante. Estará en juego el peso y papel de los liderazgos carismáticos, de la cultura organizativa y de la forma en cómo se relacionarán con la sociedad organizada, que podría jugar un papel determinante. Entre el Distrito Federal y otras entidades, ¿qué forma de hacer política tendrá más peso?, ¿logrará el carisma por resultados equilibrar el líder popular? Hay una certidumbre: ante el regreso del PRI y los poderes fácticos a la izquierda sólo le queda refundarse si quiere sobrevivir y reformar al país. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada. Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 24-10-2012

El DF no es Bakú Ciudad de México A la memoria de la entrañable Norma Zepeda.

Podría tratarse como una comedia de enredos pero toca fibras sensibles de la democracia mexicana. En 2010 el embajador de la República de Azerbaiyán se acerca al gobierno del DF para ofrecer una estatua de Heydar Aliyev. La propuesta embonaba con una iniciativa de Bakú, capital de Azerbaiyán, para sembrar al mundo de monumentos de quien califican "padre de la patria" (ese país se independizó en 1991). A la fecha hay esculturas en 14 ciudades de Asia, Europa Central y África del Norte. El DF sería la cabeza de playa para difundir en las Américas las glorias de Heydar. Por Marcelo Ebrard sabemos que "el embajador sólo quería hacer un monumento", pero que Felipe Leal, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), les sacó 65 millones de pesos para "arreglar medio Bosque de Chapultepec y la Plaza Tlaxcoaque". En la inauguración de las obras nuestro jefe de Gobierno calificó a Aliyev de "gran líder político, estadista". Sobre la Plaza Tlaxcoaque hubo protestas justificadas por el texto en la

placa de bronce. La polémica mayor se desencadena por una estatua de Heydar -bastante fea por cierto- colocada en Paseo de la Reforma y Gandhi. El problema inicia cuando el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec integrado por siete ciudadanos aprueba el preproyecto presentado por el GDF en julio de 2011, pero da marcha atrás en noviembre del mismo año cuando supo que Heydar Alíyev presidió un régimen represor y corrupto. En enero de este año informaron al GDF que no daban su aprobación a la obra. Era un buen momento para las correcciones porque las obras en el parque iniciaron hasta abril y porque la estatua llegaría hasta agosto. Las autoridades capitalinas se hicieron las remolonas. Para Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente, era "tarde para revertir un contrato ya firmado", mientras que Felipe Leal exageró cuando advirtió sobre el "riesgo de un conflicto diplomático". La pugna es poco probable porque México no tiene embajada en Azerbaiyán y difícilmente puede ser ocupada por los indignados con el desaire a la estatua. Tampoco parece probable que las Naciones Unidas desplieguen en Chapultepec a un destacamento de Cascos Azules. En el relato hay un fleco de actualidad. En 2003 Heydar Alíyev se desmayó ante las cámaras de televisión y se fue a una clínica de Estados Unidos. Antes de morir heredó el poder a su hijo Ilham, quien es otro pájaro de cuenta. Revisé cuatro de los informes sobre derechos humanos más importantes del mundo (enumerados al final de la columna) y de ellos tomé frases e ideas para describir al sistema político actual de Azerbaiyán. El actual presidente Ilham Alíyev "domina al ejecutivo, el legislativo y judicial". Es frecuente la "represión e intimidación" y la "violencia contra periodistas independientes y de oposición". El régimen controla la televisión que utiliza para "desa- creditar aquellos que disienten"; la "libertad académica" está restringida y a los estudiantes que protestan les bajan las calificaciones; las elecciones no son "limpias o confiables"; hay una "corrupción generalizada" (México está en la posición 100 en el Índice de Transparencia Internacional, ellos en la 144); hay impunidad porque la justicia es "corrupta e ineficiente"; se discrimina a los armenios y permiten que sea una pieza central en el tráfico de mujeres para la prostitución. La estatua de Alíyev conduce a dos problemas muy nuestros. El primero es el urbanismo salvaje hecho posible por autoridades que modifican los usos del suelo con bastante ligereza. El segundo es el espacio que se concede a los consejos ciudadanos. Las autoridades les aplauden cuando se comportan con mansedumbre pero los ignoran cuando se inconforman. Las relaciones entre el GDF y el Consejo Rector del Bosque de Chapultepec están tan deterioradas que este lunes Felipe Leal, sin informar previamente al Consejo Rector, anuncia una comisión de tres personajes capitalinos (Gabriel Guerra, Gerardo Estrada y Guillermo Osorno) para que emitan una recomendación. La mediación es una buena idea porque en las democracias se corrigen los errores. El Consejo Rector se equivocó cuando aceptó la propuesta inicial sin saber quién era el personaje; el GDF está actuando con ligereza al defender la permanencia de la estatua de un dictador en el Paseo de la Reforma. El DF no es Bakú. La miscelánea Los interesados en este asunto encontrarán en mi página www.sergioaguayo.org los últimos informes sobre Azerbaiyán de Amnistía Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Freedom House y Transparencia Internacional. También incluí una relatoría de los hechos elaborada por el Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec integrado por Beatriz Bugada, Luis Bustamante (este último salió en mayo de este año y no ha sido sustituido), José Luis Cortés, Denise Dresser, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Mónica del Villar. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

2013

FECHA: 13-03-2013

¿Y

la

izquierda?

Ciudad de México Mientras Enrique Peña Nieto sigue poniéndose las medallas de reformista, la izquierda es incapaz de reformar a fondo los lugares que gobierna. Revisemos el vodevil desencadenado por el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, integrante de Nueva Izquierda (la tribu de los Chuchos). Primer acto. El 25 de febrero Reforma publicó unos correos enviados por Toledo a Rodolfo Reus Medina, abogado de una constructora. Toledo le pidió más dinero para que siguiera una obra: "800 mil extras y allí queda"; y le aclaró: "si publicas algo te mando matar, cabrón". El abogado opta por denunciar para "que la verdad se conozca" y anuncia que demandará al político por extorsión y amenazas. El delegado contraataca y acusa al licenciado de "utiliz[ar] un BlackBerry falso, un chat falso, una comunicación falsa para ensuciarme. Ése no es mi BB". El perredismo arma un coro de frases desgastadas: "No voy a ser tapadera de nadie" (Jesús Zambrano); "nadie puede estar por encima de la ley" (Silvano Aureoles); la Procuraduría capitalina debe hacer una "investigación a fondo" (Manuel Oropeza, líder del PRD-DF). El procurador capitalino, Rodolfo Ríos, informa solemne que citará a declarar a "todas las personas [...] involucradas". Segundo acto. Se inicia la operación enfriamiento. El licenciado Reus envía una brevísima carta a los medios informando que su cliente, el constructor Gazi Nacif, le ha ordenado no demandar, ni "aparecer en medios de comunicación" porque "la empresa no fue objeto de extorsión alguna" (tecnicismo correcto porque el delegado pide dinero al abogado). La mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal frena la comparecencia física de Toledo y le pide un "informe pormenorizado" en 48 horas. El delegado envía un texto minimalista (1,194 palabras), notable por lo azucarado del autoelogio: se define como "un servidor público de trayectoria inmaculada" y cierra el texto con una frase que podría usarse en algún busto suyo: "no me doblegaré ante la mentira". Aclaración. Ni el delegado ni el coro perredista desmienten la evidencia presentada por Reforma demostrando que la BlackBerry sí era de Toledo. Los reporteros de Reforma siguen hurgando y encuentran que, según la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), es ilegal el terreno donde Nacif construye su edificio; en él sólo puede construirse un deportivo, una plaza pública o un jardín. El delegado acusa a quien lo precedió, Raúl Flores, que a su vez señala a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), una fuente de corrupción que ningún gobernante perredista osa tocar. Su titular, Simón Neumann, ex empresario inmobiliario, se blindó tras siete capas de hermético silencio. Tercer acto. Se desarrolla en el ámbito nacional. Con la detención de Elba Esther Gordillo y con las reformas en telecomunicaciones el Presidente y el PRI se convierten, ante buena parte de la opinión pública, en los paladines de la lucha contra la corrupción y los poderes fácticos. El lunes que anunciaron la reforma en telecomunicaciones, Zambrano justificó la participación del PRD diciendo que "ante los graves problemas del país, el error estaría en no hacer nada o seguir haciendo lo mismo de siempre". La corrupción es una llaga que lastra a la nación. Según Transparencia Internacional entre 1998 y 2012 México cayó ¡50 puntos! En la clasificación internacional pasamos del lugar 55 a un vergonzoso 105. A excepción de Arturo Núñez, que la combate como gobernador de Tabasco, la izquierda partidista se hace la desentendida. Si el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quisiera aspirar a una candidatura a la Presidencia en 2018 debería tomar el caso del delegado de Coyoacán para lanzar una batalla a fondo contra el urbanismo salvaje, una de las fuentes de

corrupción más conocidas y ofensivas. Había grandes expectativas con la gestión de Mancera, quien en su discurso de toma de posesión aseguró con voz engolada y firme: "combatiremos cualquier viso de corrupción y no permitiremos el tráfico de influencias que tanto daña a los ciudadanos". El caso de Coyoacán lo desinfla, desdibuja y acorrala. Menciona el tema en dos brevísimas conferencias banqueteras y en la segunda anuncia que seguirá trabajando con Toledo hasta que esté "perfectamente agotada toda la indagatoria". Llevará mucho tiempo el proceso porque la Procuraduría apenas inició las averiguaciones. Si fuera por la izquierda que gobierna, el caso ya estaría olvidado. Tal vez veamos algo diferente porque dos diputados panistas, Priscila Vera y Edgar Borja, están sobre el tema y porque un medio de comunicación, Reforma, le da seguimiento. La izquierda partidista vaga fragmentada, llena de verborrea y paralizada ante la corrupción urbanística de la capital. En su condición actual, es una corriente política a la izquierda de la nada. El Informe de Mauricio Toledo y las fuentes utilizadas están disponibles en www.sergioaguayo.org Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: [@sergioaguayo](https://twitter.com/sergioaguayo); Facebook: SergioAguaYoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 27-03-2013

Bloqueos Ciudad de México Importa muy poco el color de quien gobierne.

La ciudadanía continúa siendo rehén del encontronazo entre el derecho al libre tránsito y a la manifestación de las ideas. El viernes 22 de marzo empezaba la Semana Santa y hubo un bloqueo total de la Autopista del Sol que conecta Acapulco con la Ciudad de México. La interrupción del tráfico duró nueve horas y lo comento por ser uno de los casos límite de una realidad desatendida que padecemos cotidianamente y que está haciéndose insoportable. Como los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg, que es parte de la CNTE) ya no inquietaban al gobierno estatal perredista con la toma de edificios públicos, se lanzaron a interrumpir el paso de la autopista federal. Hora tras hora, miles de infortunados padecieron el mal tino de caer en la ratonera vial. La medida les funcionó a los maestros: humillaron al gobierno estatal porque ganaron los salarios caídos y la creación de una comisión que los evaluará localmente, lo cual es un reto frontal a la reforma educativa nacional. Paso por alto la dudosa legitimidad de los reclamos del magisterio guerrerense y la afectación de los derechos a la educación de la infancia de aquella entidad para centrarme en un ángulo ignorado: los miles de ciudadanos varados fueron abandonados a su suerte por las autoridades de todos los niveles. Ni Protección Civil federal ni estatal acudieron a su auxilio llevándoles, por ejemplo, agua y alimentos o estableciendo servicios médicos para los casos urgentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se interesó en el asunto pese a ser una vía federal, y la del estado de Guerrero ni siquiera incluyó el tema en su página de internet. La prioridad de estas comisiones es garantizar su presupuesto y dejan que las víctimas se las arreglen como puedan. No estamos ante un hecho aislado. Cualquier inconforme sabe que la manera más expedita de recibir la atención de la autoridad es ocupando una oficina, una calle o una carretera. El método es infalible porque forma parte de una cultura cívico-política acostumbrada a la ocupación temporal o permanente de los espacios públicos. Pongo algunos ejemplos. Los restaurantes que invaden la banqueta o las empresas que canalizan calles imitan a su manera a la poderosa TV Azteca que con bastante frecuencia invade con automóviles una lateral del Periférico Sur. Las autoridades de todos los estamentos hacen exactamente lo mismo. Muy cerca de TV Azteca -pero en la acera de enfrente- está una de las sedes de la Policía Federal. Hace años se instaló e inmediatamente se apropió de un carril del Periférico, los vecinos de esa zona

padecimos durante años los estrangulamientos causados por patrullas o vehículos de transporte estacionados. Hace un par de semanas documenté que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó la entrega de un espacio público en Coyoacán a una constructora a la que luego intentó extorsionar el delegado Mauricio Toledo, mientras Miguel Ángel Mancera se hacía -y se hace- el desentendido. El desdén oficial es indicativo del ínfimo lugar que les merece una ciudadanía obligada a tolerar las ocupaciones de los espacios públicos. Ninguna autoridad se ha preocupado en serio por estas víctimas del urbanismo salvaje. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha tocado muy tangencialmente este choque entre derechos. A raíz del bloqueo de Paseo de la Reforma con que se protestó por el fraude de 2006, la CDHDF recibió 904 quejas ciudadanas. En noviembre de aquel año sacó una recomendación en la cual pedía al gobierno capitalino que resolviera el choque de derechos, ésta fue ignorada. En 2010, Luis González Placencia reiteró otra vez la conveniencia de que el gobierno capitalino generara "criterios para que quienes quieren hacer uso de su derecho a manifestarse puedan hacerlo, sin afectar a quienes quieren hacer uso de su derecho al libre tránsito en la ciudad de México". También fue ignorado. Dada la frecuencia con la cual se toman espacios públicos en la capital, ¿no consideraría la CDHDF ocuparse de oficio? Por ahora, sólo Michoacán y el Estado de México están anunciando que discutirán leyes para resolver el dilema creado por quienes tienen el derecho a protestar y quienes desean transitar en libertad. La única solución que a veces funciona es que los medios tomen el asunto. Pero el escándalo debe ser razonablemente estruendoso si se quiere tener éxito. La Policía Federal liberó la lateral ocupada cuando el diario Reforma publicó en primera plana un reportaje con fotos. La denuncia en medios tiene límites porque no hay espacio para atender todas las invasiones generalizadas de espacios públicos. Esta semana se multiplica el tráfico por las carreteras nacionales. Dadas las posibilidades de bloqueos en diversas regiones los viajeros deberían cargar raciones de alimentos y agua. En este tema la autoridad vive bloqueada. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: [@sergioaguayo](https://twitter.com/sergioaguayo); Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 15-05-2013

Saqueando al DF Ciudad de México El gobierno capitalino participa activamente en el saqueo de una de las mayores riquezas del Distrito Federal: el uso del suelo.

Y la pieza clave es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). En los medios capitalinos se observa la multiplicación de los vecinos quejándose porque se talan árboles o se construye en áreas verdes y zonas protegidas; porque se rebasan la altura o la densidad de las construcciones; porque se autorizan restaurantes o casas de juego y porque el gobierno vende calles. También se organizan y recorren oficinas gubernamentales e invierten en abogados y en juicios interminables. En algunas ocasiones se alzan con la victoria, por lo general padecen tribulaciones y frustraciones. Sólo persisten por la claridad de sus convicciones cívicas. Mientras una parte de la ciudad se embellece la otra se afea, lo que degrada la calidad de vida. La Seduvi es un ente opaco y hermético que para algunos es la "caja chica" del jefe de Gobierno (otros aseguran que los centavitos salen del Mercado de Abastos). Todos los entrevistados coinciden en que la Seduvi tiene gran responsabilidad en una realidad descrita, en 2010, por el entonces contralor general del GDF, Ricardo García Sainz, el uso del suelo en la capital es "un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones" de la autoridad. Miguel Ángel Mancera celebró su victoria en las urnas con una fiesta en el World Trade Center. Esa noche destacaban por su júbilo los principales "desarrolladores" e

"inmobiliarios" capitalinos. Deben seguir contentos porque Mancera eligió para dirigir la Seduvi a Simón Neumann Ladenzon, experimentado empresario inmobiliario con tres décadas construyendo en la capital. Cuando surgieron las críticas por las implicaciones de ese nombramiento, Mancera respondió diciendo que es un personaje de "honradez probada" sin "ningún conflicto de intereses". En estos meses Neumann ha demostrado su determinación de guardar silencio. Él y la Seduvi han sido particularmente parcos a la hora de explicar las irregularidades en el ahora famoso edificio de la calle Céfiro en Coyoacán que sacó a la luz la corrupción del delegado de Coyoacán Mauricio Toledo. Tampoco respondió al pliego petitorio que le entregaron en marzo más de 10 mil habitantes de 800 colonias capitalinas. Me impresionó la energía y el conocimiento de la ciudad que tiene esta coalición horizontal de vecinos afectados por el urbanismo salvaje (los interesados pueden buscar en internet Suma Urbana). Ni Neumann ni la Asamblea Legislativa del DF ni las delegaciones ni el reciente Comité de Expertos del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) les han contestado. La Seduvi es una reliquia autoritaria. Su titular lo nombra el jefe de Gobierno sin intervención de la Asamblea. Cuando los asambleístas opositores solicitaron la comparecencia de Neumann para que explicara irregularidades en el uso de suelo, la mayoría perredista en la ALDF se opuso de manera unánime, con sus excepciones que la distinguen. Los negocios, ya se sabe, son un ablandador de ideologías y biografías. En torno a la Seduvi operan las inmobiliarias que han atesorado una enorme experiencia en métodos para aceitar a su favor la voluntad de autoridades del GDF y las delegaciones y que tienen una notable capacidad de influencia en los tribunales de primera instancia. Entre todos destrazan sistemáticamente la calidad de vida de amplias zonas de la capital. El urbanismo salvaje y depredador es un patrimonio cultural de todo México. Uno de los motivos por los cuales me siento orgulloso de vivir en la capital es el vigor y la densidad del capital social que ha permitido el florecimiento de derechos ausentes en otras partes del país. Esa sociedad participativa tiene ahora una batalla que trasciende ideologías y clases sociales: frenar el saqueo de la capital, y para ello la prioridad es exigir modificaciones a la manera como funciona la Seduvi, una dependencia que por ahora sólo rinde cuentas al jefe de Gobierno y a las inmobiliarias. LA MISCELÁNEA Después de insistir, la Seduvi aceptó entregarme "para consulta" una lista tentativa de las 50 personas seleccionadas por ellos para integrar algo llamado el Comité de Expertos del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse). No puedo por tanto difundir ese listado; pero sí puedo utilizar una versión previa que circula en internet. Me llamaron la atención cuatro nombres que aparecen en la lista oficial y en la encontrada en la red. En el Conduse participa el asambleísta Carlos Hernández Mirón que preside la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF (no son compatibles las funciones de vigilar y asesorar a la misma dependencia). También están personajes sin tacha. A Cuauhtémoc Cárdenas, Mario Molina y Alicia Ziccardi Contigiani solicito que convenzan a Neumann de publicar los nombres de los 50 expertos y que escuchen a la coalición agrupada en Suma Urbana. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 22-05-2013

Capitales Ciudad de México Creció el poder de las élites y la conciencia de la sociedad pero se mantuvieron casi intactos los tapones que frenan la participación social.

En los últimos 20 años México dejó de ser un país presidencialista y centralista; grandes porciones de poder se lo apropiaron las élites (tradicionales o nuevas) entre las que se encuentran

los cárteles, los gobernadores, los líderes sindicales, los multimillonarios y los partidos políticos. Los valores políticos también se transformaron. Aunque los porcentajes varían por encuestadora, hay un alto respaldo a la democracia como forma de gobierno y una gran insatisfacción por la manera en que funciona. También se amplió la certidumbre de que se tienen derechos y se valora la participación social (según la última Encuesta Mundial de Valores la sociedad da casi el mismo nivel de confianza al movimiento feminista que a las Fuerzas Armadas). Sin embargo, la participación en asuntos públicos, partidos políticos y organismos civiles se ha desplomado o estancado (ronda 20% de la población adulta). Ese taponeo provoca frustración, desencanto y pasividad y obstaculiza la solución de muchos problemas. Las cifras muestran un patrón: a mayor capital social positivo menores niveles de violencia y mejores gobiernos locales. Cuando una persona canaliza sus deseos en acción colectiva que se institucionaliza se crea capital social positivo (es el caso, por ejemplo, de los medios independientes o de los organismos civiles y empresariales). El tejido social negativo serían las redes corruptoras o delincuenciales. En México el acceso a la información y la libertad de expresión, entre otros factores, han permitido un fortalecimiento relativo del capital social. Sin embargo, su crecimiento ha sido desigual o se ha frenado por la ceguera cortoplacista de las élites que, salvo algunas excepciones, han saboteado las instituciones que deberían ser conducto entre sociedad y gobiernos. Por lo general, los partidos se alían con las élites; los organismos públicos que tutelan derechos, o los consejos ciudadanos tan comunes hoy en día son copados y cooptados por quienes gobiernan transformándose, por tanto, en vistosos pero irrelevantes floreros. La relación entre sociedad y élites es diferente en cada estado y región. Es un rompecabezas en constante movimiento que apenas empezamos a apreciar en toda su complejidad. El Distrito Federal, por ejemplo, ha disfrutado y padecido las consecuencias del centralismo; es el espacio geográfico con mayor concentración de capital social. En este lugar florecen medios independientes, universidades, centros de investigación, organismos civiles, movimientos sociales, cámaras empresariales y organizaciones vecinales que gradualmente se profesionalizan y especializan en el arte de enfrentarse a los jinetes del urbanismo salvaje y sus aliados en el gobierno. Puede afirmarse que en el Distrito Federal hay relativamente menos obstáculos a la participación que en otras ciudades. Los organismos en la ciudad tienen como particularidad que incorporan en sus objetivos la agenda nacional (en el interior del país no es una práctica tan marcada). Recapitulemos. Los médicos se movilizaron en la capital contra el autoritarismo sindical en 1965; aunque los estudiantes protestaron en 1968 por agravios locales su pliego petitorio iba en general contra la violencia estatal; las grandes marchas de 2008 y 2011 contra la violencia se hicieron teniendo en mente lo que pasaba en el país; y el Movimiento YoSoy132 en su primera etapa se centró en la democratización en los medios. La izquierda ha triunfado en la capital desde 1997 porque había una base electoral y un tejido social que le ha permitido permanecer en el cargo, mientras que en otras entidades (Zacatecas, Baja California Sur y Michoacán) ha carecido de la consistencia para permanecer, trascender y distinguirse. A los gobiernos capitalinos hay que reconocerles algunas mejoras en atención a grupos vulnerables, en el transporte colectivo y en la ampliación de libertades. Sin embargo, se han olvidado de combatir el urbanismo salvaje, una corrupción que toleran porque les beneficia. Un ejemplo inmediato fue el escándalo del fin de semana: el desalojo en Tlalpan que sacó a la luz la existencia de redes de "compañeras" y "compañeros" que destruyen los bosques del sur. Entre otras omisiones estaría su incapacidad para frenar el cerco de violencia que poco a poco rodea a la capital. En la agenda de prioridades de la sociedad organizada debe estar alentar a la ciudadanía, canalizar su conciencia, reflexión y energía en organizaciones que nutran el capital social; el desazolve de los tapones estructurales a la participación ciudadana; y, en el caso de los organismos establecidos en la capital, el dedicar tiempo al DF, donde es posible una alianza virtuosa entre

vecinos, activistas, periodistas, académicos y políticos de diferente signo que logre el predominio del capital social positivo sobre el negativo. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada

FECHA: 28-08-2013

Los bloqueos Ciudad de México ¿Por qué se bloquean tantas vialidades?

¿Qué pasaría si se concilia el derecho a protestar con el de transitar y acceder libremente a lugares públicos? La calidad de una democracia se mide por la existencia de mecanismos para conciliar derechos. La protesta en la calle es legítima pero tiene límites. Para el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, los requisitos que se deben cumplir son: 1) que sea pacífica; 2) que sea razonable en duración y costo infligido a terceros; y, 3) que tenga fórmulas para afectar al mínimo posible la libertad de tránsito y el acceso a lugares públicos. Los maestros de la CNTE rebasan constantemente estos límites porque, dicen, es la única manera de ser escuchados por la autoridad. Tienen razón en parte: fueron oídos pero no atendidos. En marzo pasado bloquearon la Autopista del Sol y lograron un acuerdo con la autoridad para organizar foros donde recogieron propuestas que serían incluidas en las leyes reglamentarias. Gobierno y legisladores faltaron a su compromiso e ignoraron las propuestas y en la última semana los maestros desencadenaron una ola de ocupaciones de la vía pública capitalina para rechazar la "mal llamada reforma educativa" y exigir respeto a sus derechos laborales. Se antoja difícil que puedan modificar las leyes aprobadas y frenar la que pospusieron. El bloqueo ha evolucionado. Es una forma rápida de llamar la atención de la autoridad pero, ¿cuántas de esas acciones han servido para resolver problemas de fondo? Las marchas de 1968 fueron un parteaguas de la transición y la manifestación de la sociedad civil en enero de 1994 a favor de la paz en Chiapas frenó el impulso represor del gobierno federal. Sin embargo, el bloqueo ha ido perdiendo eficacia. Los gobernantes reaccionan a la interrupción del tránsito y se sientan en "mesas de diálogo" pero los compromisos adquiridos son generalmente ignorados. Propongo como explicación alternativa que los bloqueos se han convertido en método de preservación del orden establecido. Sirven para llamar la atención sobre una situación anómala pero no logran modificar de raíz el problema y terminan fortaleciendo el cambio simulado (el "gatopardismo"). Por ejemplo, la detención de Elba Esther Gordillo no alteró los usos y costumbres del SNTE y los bloqueos de los maestros de la CNTE tampoco han logrado una reforma educativa integral. Si se quisiera atacar de raíz la mala calidad educativa, ¿por qué no metieron en la ley que la permanencia se ligaría a la evaluación en todos los niveles de la educación pública y privada o, todavía más radical y extremo, en todos los cargos públicos? El Distrito Federal es un caso especial por la cantidad de protestas que se realizan en la vía pública. Algunas son el resultado de asuntos locales, otras nacen de problemas en otras entidades. Una consecuencia es la incertidumbre en que vivimos. Sabemos a dónde queremos llegar pero no cuándo o cómo lo lograremos. Pese a los enormes costos que eso tiene, la autoridad se rehúsa a poner reglas. En noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respondió a las 904 quejas que recibió por el bloqueo de Paseo de la Reforma recomendando al gobierno capitalino que estableciera criterios para conciliar derechos de inconformes y habitantes. En 2010, la institución repitió el llamado. Es notable que una autoridad tan orgullosa de ampliar la protección de los derechos se resista a encontrar fórmulas efectivas para proteger a los transeúntes. Tal vez no lo hace porque regular la convivencia en la calle la obligaría a enfrentar en serio el urbanismo salvaje de la capital; el suelo es aprovechado para fines privados por restaurantes de lujo, ambulantes encuadrados

en organizaciones corporativas, inmobiliarias, etcétera. Como lo mismo pasa en el resto del país, los bloqueos de las vialidades terminan alimentando una paradoja: quienes los utilizan los justifican (en la mayoría de los casos de manera inconsciente y hasta de buena fe) porque es una forma de impulsar cambios; lo que estamos viendo es que sirven para frenar las transformaciones. Quienes los utilizan y quienes los toleran terminan siendo conservadores. En el trasfondo está una gigantesca resistencia al cambio. Nadie quiere hacerlo porque cualquier alteración de las reglas existentes afectaría negativamente a quienes ahora detentan partes del poder. Toda proporción guardada, el bloqueo de calles es como la pareja que utiliza el insulto como recurso para no cambiar. Se trata de colusiones disimuladas y conservadoras. Este férreo bloqueo de voluntades podría resquebrajarse con la intervención del factor externo. Uno de ellos es el respeto a los derechos de libertad de acceso y tránsito de la población. Como tal vez intuyen las consecuencias, el gobierno y los maestros coinciden en minimizar, ignorar o ridiculizar esos derechos. En otras palabras, el bloqueo de calles termina apalancándose en el bloqueo de voluntades. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: [@sergioaguayo](https://twitter.com/sergioaguayo); Facebook: SergioAguayoQuezada Este texto se benefició de las sugerencias del doctor José Luis Salinas. Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 18-09-2013

Coyotepec Ciudad de México Mientras a Vicente Moreno le clavaban dos veces un puñal le susurraban que era "un encargo de Alfredo Anguiano Fuentes para que no te pases de pendejo, hijo de tu chingada madre".

Luego, los agresores corrieron por las calles del pueblo mientras tiraban bala. Vicente es un defensor de derechos humanos que salvó la vida porque el puñal quedó a milímetros del hígado. Esto no debió pasar el 5 de septiembre porque Vicente está protegido desde julio por el Mecanismo [federal] de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Alfredo, a quien se atribuye el encargo, es el presidente municipal priista de Coyotepec, Estado de México. El enojo viene de un conflicto por el manejo del agua. Coyotepec tiene 50 mil habitantes y su desgracia es contar con el agua que necesita el municipio vecino (Huehuetoca) que paga las consecuencias de haber sido seleccionado por las inmobiliarias para construir 70 mil casas. Se triplicó la población y les urge el agua de un acuífero sobreexplotado (Cuautitlán-Pachuca). Enrique Peña Nieto ahora dice que "las ciudades" han "crecido en forma desordenada, sin planeación integral", cuando alentó como gobernador el urbanismo salvaje que también practican panistas y perredistas. El agua de Coyotepec la controla una Administración de Agua elegida por usos y costumbres. Acusándolos de opacidad, el presidente municipalizó el servicio en una asamblea de 10 minutos. Sucedió lo habitual: 1,500 habitantes bloquearon la autopista México-Querétaro durante cuatro horas. La policía mexiquense los desalojó dejando una cincuentena de heridos. Los inconformes se apoderaron entonces de la presidencia municipal y el primer día de julio un sicario mató a balazos a un inconforme y lesionó a otro. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, del Estado de México, llevó el asunto al Mecanismo quien decidió, en una reunión del 12 de julio, proteger a los amenazados de Coyotepec. ¿Qué factores impidieron al Mecanismo prevenir la agresión contra Vicente? Desentrañarlo importa porque el Mecanismo es estratégico para salvar a defensores y periodistas de quienes depende la salvaguarda de derechos vitales en estos tiempos de violencia huracanada. El Mecanismo se crea en noviembre de 2012. Nació rebasado por los casos abandonados por un gobierno panista sin interés en las víctimas. En sus 10 meses de existencia ha derrochado voluntad pero todavía no

puede responder con rapidez a las emergencias. Aun no entrega el "análisis de riesgo" solicitado, hace dos meses, por los defensores de Coyotepec. La justificación es el exceso de trabajo acumulado que se complica por las exigencias burocráticas. El Mecanismo también está atado por su incapacidad para supervisar otras dependencias federales. Pidieron a la Policía Federal un "patrullaje" en Coyotepec. La PF asegura que cada día hace rondines por las afueras del pueblo, las víctimas responden que desde julio sólo los han visto en cuatro ocasiones y el Mecanismo carece de atribuciones para verificarlo. Pero el mayor obstáculo sigue siendo el desinterés de gobiernos locales. Uno supondría que el Estado de México se esmeraría en proteger los derechos humanos que tanto defiende el Presidente en sus discursos. Nada de eso. El Mecanismo le solicitó hace dos meses a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), presidida por el licenciado Marco Antonio Morales Gómez, "un informe sobre la problemática" en Coyotepec y un "seguimiento" de la queja. En las semanas que han pasado la Codhem ni ha escrito el informe ni se ha presentado a las reuniones donde se discute el caso ni ha visitado a las víctimas en el pueblo. La indiferencia tiene una explicación que se encuentra en el Compromiso 29 del Pacto por México. Hablan de las amenazas del crimen organizado contra defensores y periodistas pero nada dicen de que buena parte del riesgo viene de gobernantes locales que hostigan, satanizan o ignoran a inconformes como los de Coyotepec, apoyándose a veces en medios locales. Para ejemplo, lo observado en el Estado de México. A Vicente Moreno lo siguen agrediendo en Coyotepec; ahora amenazan a sus clientes para que no renten sus plantas de luz. Dejadas a su suerte, las víctimas critican al Mecanismo y a los gobernantes que se enojan por considerarse injustamente atacados. Pasan por alto que el Mecanismo carece de la capacidad para modificar la violencia estructural contra periodistas y defensores, sobre todo de quienes están en las trincheras. En este terreno Enrique Peña Nieto y la mayor parte de los gobernantes tienen un hermoso discurso que nada tiene que ver con la realidad: los amenazados están abandonados y Coyotepec y Vicente lo demuestran. ·LA MISCELÁNEA Presido un organismo civil, Propuesta Cívica, que tiene un programa dedicado a dar asesoría jurídica a periodistas y defensores amenazados, Coyotepec incluido. Las opiniones aquí expresadas no representan ni comprometen a Propuesta Cívica. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 13-11-2013

Crónicas urbanas Ciudad de México Plenamente justificados los homenajes al gran Miguel Concha Malo.

La Supervía Poniente continúa siendo un caso paradigmático preñado de lecciones útiles para comprender la relación entre sociedad y autoridad. Uno de los grandes problemas nacionales es el desorden urbanístico. El conflicto por la Supervía se inicia cuando el entonces jefe de Gobierno Manuel Camacho Solís decide construir un polo urbano en Santa Fe que, al carecer de vialidades, se transforma en ratonera dorada. El gobierno de Marcelo Ebrard lo soluciona entregándole a empresas nacionales y españolas una concesión para una Supervía de paga entre Santa Fe, las Águilas y San Jerónimo. La resistencia vecinal se inicia en 2008 y el Frente Amplio Opositor concita respaldos por las inconformidades en las modificaciones al uso de suelo hechas para enriquecer a unos cuantos. Hubiera sido otra resistencia quijotesca de no haber sido porque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emite, en enero de 2011, la primera recomendación sobre un caso tan grave de urbanismo salvaje. El punto nodal de ese

documento es solicitar a la autoridad que cumpla con la ley y haga una consulta. El GDF ignora a la CDHDF. La situación se le complica al GDF y a las empresas porque en diciembre de 2011 la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) presidida por Jorge Fernández Souza- falla por unanimidad a favor de Greenpeace y varios ciudadanos. Les reconoce interés legítimo en el tema y determina que al "no realizar la consulta pública respectiva la autoridad demandada violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, información y participación". Esa muestra de autonomía judicial pronto fue desdibujada por otros jueces. La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y la empresa Controladora Vía Rápida Poetas unieron fuerzas y argumentos y apelaron el caso y 18 meses después la Sala Superior del TCADF les dio la razón sin entrar jamás al fondo del asunto; se deshizo de la incómoda situación invocando cuestiones de procedimiento. El fallo huele a parcialidad y a conflictos de interés. La actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso, Yasmín Esquivel Mossa, se casó en diciembre de 2011 con el fundador y presidente del Grupo Riobóo que participaba en la construcción de la Supervía. Ocho meses después de la boda aclaró que consideraría excusarse del caso ante el pleno del Tribunal. Luego se le olvidó y participó, su firma aparece en la sentencia final. Es posible que la presidenta del Tribunal violara la ley pero, ¿quién la llamará a cuentas? Las ciudades mexicanas están sembradas de este tipo de historias que salen a la luz con hechos fortuitos como el sismo de 1985 o los ciclones Manuel e Ingrid. Tenemos semanas enterándonos de las corruptelas públicas y privadas tras la construcción de unidades habitacionales en terrenos de Acapulco no aptos. Pese a las evidencias, ningún ex funcionario o constructor ha sido castigado. Nuestros gobernantes se llenan la boca con menciones al Estado de derecho para luego someter la legalidad a los intereses particulares. Los abusos urbanísticos también salen a la luz por las protestas vecinales que enfrentan la absurda lentitud de la justicia mexicana. En el caso de la Supervía la Sala Superior del TCADF se tomó un año y medio para decidir a favor de la empresa y el GDF invocando cuestiones de procedimiento. Lo hizo dos meses después de que la Supervía fuera inaugurada. Las constructoras depredadoras y sus aliados en los gobiernos son maestros en el arte del hecho consumado: construyen rápido y luego dejan que el tiempo desgaste a los vecinos aprovechándose, para ello, de una autoridad generalmente remolona. Un ejemplo es el famoso edificio de Céforo 120 en Coyoacán -prueba pública de la corrupción del delegado Mauricio Toledo- al que el gobierno de Mancera ya hasta le quitó los sellos de clausura. La última gran lección de la Supervía es que los funcionarios que osan ser independientes y le dan la razón a los ciudadanos son destituidos o marginados. La recomendación por la Supervía es una de las razones por las que no reeligieron como ombudsman a Luis González Placencia. La sociedad necesita de organismos públicos de derechos humanos independientes de la autoridad. A la nueva titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, se le acusa de tener una cercanía excesiva con Miguel Ángel Mancera. Los conflictos por el urbanismo salvaje le permitirán ratificar una autonomía demostrada en otros casos. LA MISCELÁNEA Por la importancia de la participación ciudadana quiero compartir el gusto por las celebraciones en Guadalajara del 50 aniversario del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec). Tienen un historial de congruencia y honestidad que replica la personalidad de uno de sus fundadores, el inolvidable Carlos Núñez Hurtado, muerto prematuramente en 2008. Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: SergioAguayoQuezada Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

FECHA: 27-12-2013

Interlocutores .- Aprovecho el frenón navideño para responder preguntas que periódicamente me hacen sobre el oficio de escribir columnas de actualidad política.

El aspecto más importante es el interlocutor para el cual se escribe. México tiene una profunda cultura presidencialista y en el apogeo del autoritarismo buena parte de los textos publicados tenían como destinatario explícito al poderoso que contaba con los recursos, la capacidad y la responsabilidad de resolver todos los problemas presentes y futuros. Podía ser, aclaro, una persona (lo más común el Presidente), una institución o un partido político. Se suponía que el receptor del mensaje no estaba bien informado y deseaba enterarse de los agravios o conocer las ideas que traían la clave para resolver grandes problemas nacionales. Cuando se revisan esos materiales en hemerotecas o archivos impacta la ingenuidad de quienes escribían, el peso dado a los adjetivos y la escasez de datos duros. Aunque todavía hay quienes escriben para el Presidente, el resquebrajamiento del presidencialismo centralista ha multiplicado las interlocuciones. Dependiendo de la ciudad o región importan muchísimo más las sensibilidades del gobernador o del funcionario, del empresario que controla ambulantes o taxis piratas o del jefe de la plaza de tal o cual cártel. Con los años ha ganado terreno el escribir pensando en los sectores conscientes de la sociedad. Quienes tomamos esa opción preferencial lo hacemos desde nuestras peculiaridades. En mi caso, arrastro las consecuencias de ser un académico obsesionado con el detalle y la información que un equipo de colaboradores reúne constantemente -y a los cuales reconozco semanalmente su aporte sobre los temas que investigo para clases o libros. Entre otros, la violencia, el urbanismo salvaje, los derechos humanos y las relaciones con Estados Unidos. Un ingrediente adicional e indispensable en este trabajo es registrar lo que piensan los colegas. Estoy convencido de que la interacción con la sociedad ayuda en la relevancia o profundidad de una argumentación. En el pasado era tan común el maquinazo superficial porque era difícil apreciar las reacciones a lo que uno decía. En la actualidad sabemos que se esperan ángulos inéditos, argumentos fundamentados en hechos y armonía entre el fondo y la forma. En una categoría aparte están quienes exigen recomendaciones sobre qué hacer para enfrentar una problemática. Todo lo anterior hay que sazonzarlo con las repercusiones de la revolución tecnológica en curso. Cualquier artículo está sujeto al escrutinio crítico de un grupo amplio de personas que utilizan las redes sociales para corregir, aprobar o censurar. Hay de todo. Están quienes fundamentan con datos duros sus ideas, los que reprochan tal o cual postura o los que descalifican porque sí. Un caso especial son los memoriosos que monitorean la evolución del pensamiento para señalar inconsistencias. Y esta interacción se da a una velocidad vertiginosa que modifica la distancia y dinámica entre emisor y receptor. La dialéctica enriquece, pero exige tener el ego bien acomodado para cribar sin arrebatos los reconocimientos, las condenas y las sugerencias. En ocasiones hay que defender con firmeza el derecho a pensar de manera independiente o responder con dureza cuando se desliza la difamación, porque el lodo mancha y permanece. En otros momentos debe reconocerse abiertamente el error o la omisión, y hay casos en los que la información recibida abre perspectivas que deben explorarse. Algunas columnas han nacido de la confianza de lectores cuyas aspiraciones y puntos de vista uno aspira a recoger y difundir. Es una vorágine sin fin. Llevo más de cuatro décadas escribiendo columnas y emitiendo opiniones y me sigue entusiasmando y angustiendo el reto semanal de armar un texto razonablemente original y relevante para el momento, cimentado con datos duros, y respetuoso de la sintaxis y la ortografía. Siempre prolongo al máximo el momento en que pierdo control del manuscrito porque como académico obsesivo del detalle sé que en minutos u horas se me ocurrirá un término más adecuado o un giro lógico más apropiado. La rotativa no espera

y después de entregar el texto y atender las sugerencias de Grupo Reforma hay que aguardar unas horas antes de conocer la reacción de interlocutores bien informados que podrán enriquecer o mallugar este texto metido entre Navidad y Año Nuevo. Gracias por acompañarme y lo mejor para 2014. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=16003> Fecha de
publicación: 27-12-2013

2014

FECHA: 08-01-2014

Marañas defeñas .- Miguel Ángel Mancera es un gobernante sensible y bien intencionado pero confundido sobre el papel de partidos-gobierno y sociedad y la relación entre ambos.

El tema importa porque se inicia la batalla electoral por la capital y por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En el primer informe de Miguel Ángel Mancera (septiembre de 2013) aparece un párrafo que sintetiza su perspectiva sobre la construcción de la democracia en la capital: "Durante los últimos dieciséis años, los gobiernos [...] de la izquierda, hemos trabajado por transformar a la Ciudad de México en [...] un referente de los derechos sociales y civiles a nivel nacional e internacional". En esta interpretación, los partidos y el gobierno se convierten en el sujeto que protagoniza la historia; la sociedad queda reducida a objeto o, en el mejor de los casos, a testigo. Propongo otra explicación. Sin negar los aportes hechos por partidos y gobierno, sostengo -y tengo evidencia para demostrarlo- que el desarrollo democrático alto del DF se debe a los elevados niveles de capital social positivo construidos durante décadas. En la capital se han gestado algunas de las sacudidas sociales más importantes de la transición: los movimientos de médicos (1964-65) y estudiantes (1968), la reacción social al temblor de 1985, las protestas por los fraudes electorales de 1988 y 2006, las marchas contra la inseguridad en 2008, por las víctimas en 2011 y el movimiento #YoSoy132 en 2012. Esa energía alimentó, transformó y creó instituciones. En otras regiones del país la sociedad también fue protagonista. ¿Quién puede negar la importancia del Movimiento Navista de San Luis Potosí o la movilización social contra el fraude en Chihuahua en 1986?, en la cual ¡hasta los obispos amenazaron con suspender las misas! ¿Alguien podrá regatear el impacto que tuvieron en las legislaciones electorales (y otros ámbitos) las insurgencias armadas de los años setenta o la zapatista de 1994? En suma, la historia refuta al reduccionismo extremo del jefe de Gobierno que lo hace cometer yerros importantes. Cuando habla de "la Capital Social" se refiere a una tarjeta de descuento que ordena el acceso a comedores públicos, pensión alimentaria para los adultos mayores y campañas de alfabetización. Y en la parte que dedica a la participación ciudadana incluye la entrega de útiles y uniformes escolares. No menosprecio ni critico estas políticas que, siendo precisos, son aspirinas ante la magnitud de la desigualdad y la pobreza en la capital. En otras partes del informe, Mancera idealiza algunos aspectos de la "corresponsabilidad" y la "participación ciudadana". Cuando habla de urbanismo proyecta una imagen de estrecha colaboración entre gobierno y vecinos organizados, y afirma que las demandas de éstos son atendidas. No es el caso. La lucha contra el urbanismo salvaje es frustrante, porque quienes casi siempre terminan ganando son los depredadores aliados con funcionarios y jueces corruptos. El jefe de Gobierno caricaturiza el concepto de capital social que los teóricos de la democracia utilizan para categorizar a la

ciudadanía consciente y activa, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación independientes, etcétera, que participan constantemente en la vida de la comunidad vigilando, acotando o proponiendo políticas públicas. El mapa del capital social capitalino es complicado. Hay población pasiva; otros con consciencia pero atomizados; instituciones y organizaciones sociales, y las clientelas de las tribus. Es cierto que el GDF escucha y atiende a los independientes pero se siente más cómodo tratando con los líderes de las organizaciones clientelares. Los otros partidos también niegan protagonismo a la sociedad porque todos ellos quieren justificar su monopolio sobre los asuntos públicos. Este mes el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, terminará de cumplir con los requisitos legales para convertirse en partido. Con ello se da el banderazo simbólico al huracán que sacudirá a las izquierdas partidistas de aquí a las elecciones de 2015. Diversas voces se alzan a favor de algún tipo de entendimiento entre ellos. Suena lógico, pero ¿entenderán quienes gobiernan desde la izquierda que su crisis de representatividad viene en parte de la exclusión que hacen del papel jugado por la sociedad y de las marañas que hacen al hablar de participación ciudadana? PD. Dejo para otra ocasión el análisis de 2015 y la ZMVM. Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Rodrigo Peña González @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:

<http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=16551> Fecha de publicación: 08-01-2014

FECHA: 05-02-2014

La hora del ahora .- Las izquierdas partidistas tienen 25 años borrando el pasado y el presente que las contradice y prometiéndonos que todo será diferente en el futuro.

Ya basta. Es la hora del ahora. En el combate a la reforma energética, el PRD y Morena van divididos. Seguirán desunidos por rencillas añosas, por diferencias programáticas reales y por los dictados de una legislación electoral que impide a los nuevos partidos ir en alianza y les exige sacar 3 por ciento del total de la votación válida emitida del voto en las elecciones federales de 2015 (tomando la participación en 2009, Morena necesitará un millón de votos). Se viene una guerra fratricida que será particularmente enconada en la estratégica Zona Metropolitana del Valle de México. ¿Será Morena el capullo del cual nacerá ese partido moderno que la izquierda social tiene décadas esperando? Como llevará años averiguarlo, enumero sus lastres más evidentes: 1) dependencia excesiva de dos liderazgos carismáticos; 2) proliferación de tribus encabezadas por caudillajes menores; y, 3) resultados generalmente pobres como gobernantes locales. El resultado es una paupérrima institucionalidad, una distancia cada vez mayor con los votantes independientes y la imposibilidad de ofrecer propuestas acordes a la magnitud de los grandes problemas nacionales. Los liderazgos de las izquierdas reaccionan a los problemas arriba mencionados de la siguiente manera: 1) los reconocen abiertamente; nadie los supera en la autocrítica; 2) no hacen absolutamente nada para corregirlos; 3) cuando se les mencionan incongruencias o carencias responden con el silencio; y, 4) nos prometen que todo será diferente en el futuro si confiamos en tal o cual corriente o si respaldamos el combate a la reforma energética. Ilustro el método con dos asuntos concretos aclarando lo obvio: soy un votante de izquierda independiente y decepcionado. Con motivo de su Informe de Gobierno, el delegado de la Miguel Hidalgo instaló lonas y espectaculares por toda la ciudad a un costo todavía desconocido. Ignoro a cuántos ciudadanos convenció con su cara y el lema de "tú pagas, tú mandas" (que, por cierto, el publicista contratado por Romo pasó por alto que esa frase la utiliza

Sara desde Morelia, entre otras sexoservidoras, para ofrecer sus servicios en las redes sociales, ¿quién copió a quién?). Este comportamiento (replicado por otros delegados y delegadas) repercute negativamente en la autoridad moral y ética del PRD: 1) ¿Cómo pueden criticar a Enrique Peña Nieto por una conducta similar cuando fue Gobernador del Estado de México o al de Chiapas, Manuel Velasco, por estar haciendo algo parecido?; 2) Romo es integrante de la corriente Fuerza Democrática, encabezada por el anterior Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. ¿No se dan cuenta del daño que hacen a la imagen renovadora que buscan proyectar?; y, 3) lo inaudito es el silencio de todas las tribus y del partido ante esta violación de la ley. La relación entre el PRD y sus votantes independientes también está resquebrajándose por una visión anticuada de la participación ciudadana. Es encomiable el esfuerzo que hacen en la Capital por atender a grupos vulnerables. Son lamentables los obstáculos que ponen a la participación ciudadana independiente. El cortocircuito es evidente en el tema del urbanismo salvaje, talón de Aquiles y fuente de corrupción de los gobiernos locales de todo signo. La especulación con el suelo urbano es motivo de irritación y causa de movilizaciones ciudadanas. La reacción del Gobierno de Miguel Ángel Mancera es desconcertante por su tibieza y las prácticas dilatorias que utilizan tanto el GDF como las delegaciones, para seguir con el negocio inmobiliario. Ilustro lo anterior con la kafkiana historia del Conduse (Consejo para el Desarrollo Urbano y Sustentable), que es parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduví) presidida por el ingeniero Simón Neumann Ladenzon. La situación es risible. Seduvi niega que la Conduse esté integrada y funcionando porque quiere impedir que los residentes de 700 colonias, representados en Suma Urbana participen en él. Los vecinos demuestran que sí está funcionando con base en testimonios de integrantes del Colegio de Arquitectos, de la PAOT y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entretanto, sigue deteriorándose la mancha urbana. Ya basta de prometernos el futuro. Tienen con qué darnos un presente mejor. Maduren. Cambien. Si no actúan ahora, tal vez se queden sin mañana. Colaboró Rodrigo Peña González @sergioaguayo www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=18860> Fecha de
publicación: 05-02-2014

FECHA: 02-04-2014

Una optimista .- Hay tantas carencias que lo habitual es quedarse en lo podrido, aunque a veces se tape lo luminoso.

Va una columna (razonablemente) optimista. En la Tierra viven más de 7 mil millones de personas organizados en 244 entidades profundamente diversas (la mayoría son Estados), sus similitudes radican en que todas tienen una relación entre gobernantes y gobernados. En torno a esta relación crece por doquier el convencimiento de que para atacar los problemas de raíz la ciudadanía debe participar en los asuntos públicos. Tengo medio siglo pensando el cambio y todavía me abruma lo gelatinoso del concepto y la dificultad de encapsularlo en uno de esos recetarios de plática motivacional. Aun así, y con la cautela del caso, puedo asegurar que nuestro país reúne las condiciones para un aumento en la participación ciudadana en beneficio de las mayorías. ¿Cómo lograr ese incremento? En Brighton, Inglaterra, tiene su sede el Development Research Centre que coordinó una investigación hecha por 60 expertos que estudiaron, en 30 países, 150 casos de involucramiento social a favor del cambio en alguna política pública de beneficio general (Blurring the boundaries, www.drccitizenship.org). Es un texto que presenta

de manera sintética las complejas relaciones que se establecen entre Estado y sociedad y detecta patrones de fracasos y éxitos. Entre los factores que menciona está la presión internacional para que los Estados abran los espacios al involucramiento ciudadano o el papel estratégico de medios e intelectuales. Me detengo, para profundizar, en una frase de ese texto. Las transformaciones se dan cuando "hay una conexión entre los campeones del cambio en el Estado y la sociedad". La renovación positiva (también la hay negativa y se expresa en la corrupción) se alimenta de una empatía creadora entre activistas y funcionarios. Esta fórmula tan sencilla se enfrenta a gigantescos y diversos obstáculos. Uno es el peso de los estereotipos. Es frecuente que el ciudadano indignado categorice a todos los funcionarios como ineptos, corruptos o ilegítimos. Son correspondidos porque un buen número de políticos ven a los ciudadanos autónomos con las tonalidades que desprende la bilis. En condiciones de tanto encono se hace imposible un diálogo de calidad. Suponiendo que la relación se dé, los organismos civiles generalmente enfrentan dos tipos extremos de funcionarios: los que valoran su trabajo y los que quieren domarlos, controlarlos o destruirlos. Los funcionarios ilustrados generalmente tienen antecedentes o nexos con la academia y el activismo, y, por lo general, se sienten incómodos con la corrupción sistémica de la política mexicana. Entienden a quienes protestan, los respetan, tienen conciencia histórica de modo que escuchan y atienden, hasta donde pueden, los deseos de la sociedad. Los autoritarios creen que los cargos y presupuestos les pertenecen, y por ello desconfían de la sociedad, la desdeñan y la tratan como simple objeto. En consecuencia, se sienten muy incómodos cuando se les solicita una explicación o se les exige atender un problema. Ignoran, recelan y descalifican a los peticionarios, atribuyéndoles intenciones ocultas. Frente a ellos, hay que estar preparado para las evasivas, las negativas, las desgastantes esperas y los intentos de comprar la conciencia de los solicitantes. Es difícil llegar a algún acuerdo con personajes de este perfil. Pese a estos problemas, siguen multiplicándose en México los ejemplos de interacción exitosa: las autodefensas en Michoacán, los vecinos que enfrentan al urbanismo salvaje, la madre que defiende a sus hijos haciendo antesala con el juez para usar la "audiencia de oídas", es decir, la entrevista. La democracia no es una pradera llena de flores. Es un espacio de forcejeos y confrontaciones que a veces desembocan en alianzas para atacar un problema de raíz. Para cambiar se requiere que la ciudadanía dialogue y establezca acuerdos con quienes, desde el interior del Estado, se inclinan a favor del cambio. Por supuesto que no es fácil, pero tampoco imposible. LA MISCELÁNEA Se acerca la pausa de la Semana Santa y el espíritu también clama por su dosis de sol y oxígeno. Recomendando un libro apropiado para esos días: El evangelio social del obispo Raúl Vera, de Bernardo Barranco Villafán (Grijalbo). Es un texto de esclarecedoras conversaciones entre un experto mexicano en religión y un obispo que tomó la opción preferencial de los pobres. Colaboró Maura Roldán Álvarez. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=23572> Fecha de publicación: 02-04-2014

FECHA: 02-07-2014

Destruyendo al DF .- A la memoria de Robert Pastor, justamente reconocido.

Quienes gobiernan el Distrito Federal auspician un urbanismo salvaje que destruye el tejido social abriendo la puerta al crimen organizado. La situación empeorará si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprueba las Normas 30 y 31. México es saqueado de diversas maneras. Una muy habitual es cambiando el uso del suelo. Los "desarrolladores" seleccionan un

predio donde construyen sin preocuparse por el impacto urbano. Quienes gobiernan lo aceptan a cambio de dinero o favores sin pensar en las consecuencias ambientales o sociales. Al deteriorarse el entorno crece el espacio para la delincuencia. Los gobiernos capitalinos han hecho esfuerzos notables por mejorar el hábitat y hay que aplaudirles las ecobicis y los metrobuses. Desafortunadamente, también han sido muy tolerantes con el urbanismo salvaje que arrasa los bosques del sur y las colonias y barrios de toda la ciudad. La creciente resistencia de los vecinos rara vez frena la destrucción. La lateral del Periférico de sur a norte, a la altura del cerro Zacatépetl está generalmente saturada. El GDF de Miguel Ángel Mancera autorizó a paso veloz la construcción de 24 mil metros cuadrados de despachos, restaurantes y oficinas corporativas en los 4,763 metros del predio en Anillo Periférico Sur 4258. Los vecinos se quejaron pero fueron ignorados y el 29 de abril la ALDF aprobó en unos minutos y sin discusión el cambio de uso del suelo. Después de disculparse por no haber distribuido el dictamen se fueron a una votación electrónica para aprobar en unos segundos (43 votos a favor, 2 votos en contra -Edgar Borja y Priscila Vega- y 4 abstenciones) "el dictamen" que "modifica el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Jardines del Pedregal". La ALDF aprueba con ligereza muchos otros cambios de uso del suelo. Ha sido una destrucción rutinaria, metódica, irracional del urbanismo capitalino. El golpe que se viene es peor, mucho peor. La ALDF está preparándose para recibir las Normas 30 y 31 que enviará el gobierno de Mancera. Proponen abrir por ahora 673 colonias (cada diciembre incluirán otras colonias) poniendo de pretexto a la construcción de viviendas de interés social; con ese pretexto dejan resquicios para quitar el límite al número de departamentos de cada edificio, eximen a las constructoras de proporcionar cajones de estacionamiento, les dan todo tipo de privilegios fiscales, etcétera. Mientras el PRI intenta hacerle regalos a Televisa, el PRD se los hace a las constructoras. Llama la atención que entre las colonias afectadas estén zonas de clase media alta con un valor por metro cuadrado muy elevado (la Condesa, San José Insurgentes, Guadalupe Inn, etcétera). Para evadir el límite de precios que el "interés social" impone, los venderán a otra empresa, la cual luego podrá rentarlos o revenderlos al precio de mercado. La imaginación del especulador (y de sus cómplices) no tiene límites. En la lista también metieron a las colonias populares. Un ejemplo es la colonia Morelos (una parte está en la Cuauhtémoc y otra en la Venustiano Carranza), que me permite comentar el problema de la seguridad. Hay suficiente evidencia para asegurar que la violencia tiene entre sus alimentos el deterioro urbanístico. Es por eso que el GDF, la delegación y el Programa Nacional de Prevención del Delito (federal) le invertirán 8 millones de pesos al año a la colonia Morelos para "restablecer el tejido social", que simultáneamente destruirán las Normas 30 y 31. Indudable la esquizofrenia, el cortoplacismo y la indiferencia hacia el futuro. Si los dejamos, seguirán destruyendo al DF. La lista con las 673 colonias que se verían afectadas las puede encontrar en mi página. Más información en Facebook: Suma Urbana. · LA MISCELÁNEA El 25 de junio, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, presentó, con pompa y ceremonia, el Programa Nacional de DH 2014-2018. En su discurso presumió que en 2013 la CNDH había llevado a "cabo el programa más ambicioso [y efectivo] de capacitación en materia de derechos humanos en la historia de la institución y el país". En el Programa aseguró lo contrario: "la capacitación en derechos humanos no ha incidido de la manera esperada" porque los "modelos de formación" no eran adecuados y porque resultaron insuficientes los "instrumentos de evaluación". ¿Y así quieren reelegirlo en noviembre? Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Maura Roldán Álvarez. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=30350> Fecha de publicación: 02-07-2014

FECHA: 06-08-2014

Negacionismos .- La corrupción no se combate negándola, sino entendiéndola y atacándola de frente.

Preparémonos para enfrentar la ofensiva que se viene contra los bosques y el suelo capitalinos. Si existiera un concurso internacional sobre la negación, los políticos mexicanos serían campeones. Los priistas, panistas y verdes andan en procesión lanzando cánticos e incienso a una reforma energética llena de gracia, sin jamás mencionar que fue gestada y parida en la corrupción. Perredistas como Dolores Padierna o Jesús Zambrano reaccionan condenándola por ser parte de la "corrupción generalizada", pero no hacen nada para combatirla donde gobiernan. El ejemplo más prístino es el Distrito Federal. Causó roncha la encuesta del Grupo REFORMA sobre la estrepitosa caída en la aprobación de Miguel Ángel Mancera, quien la explicó por los cambios en el Hoy No Circula. La medida impactó, pero el jefe de Gobierno nada dijo sobre el peso de la corrupción en el desencanto con él. Al 75 por ciento de los ciudadanos y al 88 por ciento de los líderes les disgusta la forma en que el Gobierno de Mancera combate la corrupción. Es la variable peor evaluada y resulta incomprensible la pachorra (e.g. indolencia) del Jefe de Gobierno. El trazo de las ciudades mexicanas debe mucho a la corrupción. Hacerse de unos terrenitos en zona prohibida para fraccionarlos o construir seis pisos donde se permiten dos ha sido una forma rápida de allegarse recursos para el dispendio o la carrera política. Los Gobiernos perredistas han tolerado esas prácticas invocando el "interés social" en dos situaciones diferentes pero complementarias. La primera es tolerando la destrucción de los bosques del sur. La mancha de cemento ha crecido incontenible por los rumbos de Milpa Alta, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. El área natural protegida Parque Nacional Fuentes Brotantes de Tlalpan (la delegación más afectada) tenía 129 hectáreas y sólo le quedan unas 8 (cifras de la delegación Tlalpan). Quienes invaden pagan el favor animando mítines y votando por quienes dominan el partido del sol azteca. En el cambalache también entran las pacas de billetes. También han recurrido al "interés social" para justificar cambios en el uso de suelo. Para eso sirvió la depredadora Norma 26 (ahora interrumpida) y para eso servirán las Normas 30 y 31 en caso de ser aprobadas. Tras esas normas está una telaraña de corrupción tejida por los "desarrolladores", las delegaciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), cuyo titular es nombrado por el jefe de Gobierno. El desorden urbanístico alimenta un creciente movimiento vecinal que se defiende como puede pese a la indiferencia que recibe de los partidos políticos. Quien ocupa teóricamente esa trinchera, el Verde Ecologista, se dedica, más bien, a todo tipo de negocios amparándose en la indolencia (e.g. pachorra) de las autoridades electorales. Los otros partidos hablan de urbanismo sin involucrarse hasta ahora. ¿Cuál será el impacto de la irrupción del Movimiento Regeneración Nacional en esta problemática específica? Según otra encuesta del Grupo REFORMA, Morena ya tiene 14 por ciento de la intención del voto capitalino. Las tribus perredistas defenderán con prebendas y regalos sus clientelas y se apalancarán en el suelo capitalino que ha sido siempre la caja chica de los políticos. ¿Combatirá Morena a la corrupción asociada al urbanismo salvaje? Si la izquierda partidista quiere ser tomada en serio, no basta con condenar la corrupción del PRI, el PAN y el Verde. Tienen que demostrar su congruencia en la capital. La ciudadanía consciente y organizada debe señalar a los políticos tolerantes de, o hundidos en, la corrupción. Limpiemos a la capital de corrupción para contribuir a la dignificación urgente de la política nacional. La miscelánea El

Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) es una organización seria que ha documentado el compromiso selectivo con los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH emitió una recomendación sobre la inadecuada atención médica a una mujer indígena embarazada. Sin embargo, no lo informó a los involucrados ni a sus representantes legales a quienes impidió consultar el expediente. Historias como estas deberían ser tomadas en cuenta por los senadores que decidirán sobre la reelección de Raúl Plascencia como presidente de la CNDH. El descuido y la negligencia son otras formas de corrupción. En mi página puede consultarse el texto de Regina Tamés y la recomendación de la CNDH. Colaboró Paulina Arriaga Carrasco. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.elnorte.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=33011> Fecha de publicación: 06-08-2014

FECHA: 20-08-2014

Los excluidos .- Para Paco Calderón, por su merecido premio.

Languidece la transición democrática. Entre las causas destaca la determinación y astucia con la cual las élites políticas excluyen a la ciudadanía de los asuntos públicos. No nos quieren. La semana pasada nos regalaron dos ejemplos de la exclusión. El lunes, el Presidente Enrique Peña Nieto, apoyado por el PRI y el PAN, promulgó una reforma energética que ni siquiera sus partidarios apoyan. Ahora se preparan para evitar que dicha reforma sea sometida a una consulta ciudadana durante las elecciones federales de 2015. En lugar de eso nos están recetando una intensa y costosa campaña propagandística que canta las glorias de unas modificaciones legales que han dejado intacta la corrupción sistémica del mundo de la energía. El PRD compite con Morena en la organización de esa consulta que permitirá saber lo que la mexicanidad quiere. Sin embargo, el PRD ignora a la ciudadanía en la capital que gobierna. Tengo años documentando casos del urbanismo salvaje que maltrata a ciudades de todo el País. En la capital me ha sorprendido la firmeza con la cual el perredismo protege, por medio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la corrupción de los "desarrolladores" que depredan la ciudad e ignora a los vecinos inconformes. En algún momento de la semana pasada, envió a la Asamblea Legislativa del DF las Normas 30 y 31 que multiplicarán los destrozos y que comentaré en otra ocasión. Octavio Paz alimentó el mito del mexicano pasivo al describirlo como un ser "silencioso y tímido, resignado... Sonríe siempre, espera siempre". Apuntaló, de esa manera, la falsa tesis de la pasividad mexicana. Es una creencia que contradicen los hechos. Además de que nuestra historia está repleta de intentos malogrados por participar en asuntos públicos, tengo evidencia para asegurar que en estos momentos alrededor de la mitad de los mexicanos quisieran participar en asuntos públicos, sobre todo en organizaciones de la sociedad civil; los partidos cada vez son menos atractivos. El impulso se frustra porque las élites políticas lo frenan (el trato dado al ahora encarcelado Dr. José Manuel Mireles es paradigmático) y porque hay pocas, muy pocas, organizaciones sociales. Sólo participa en ellas de manera permanente alrededor de 10 por ciento de la población. En resumen, la sociedad mexicana tiene conciencia de sus derechos y quiere involucrarse, pero faltan las instituciones que le permitan hacerlo. Si uno revisa la prensa con esta perspectiva, la retahíla de malas noticias siempre tiene de contrapunto la inconformidad de una persona o un grupo. Las víctimas se organizan para buscar a sus desaparecidos o para enfrentarse a los delincuentes, en la capital brotan organizaciones de vecinos que luchan contra el urbanismo salvaje, en Puebla y Sinaloa se movilizan contra leyes retrógradas y en Sonora y

Quintana Roo se empeñan en defender el agua y la selva. La magnitud de la resistencia no se aprecia porque carecemos de un "protestómetro" que nos dé una cifra independiente sobre el número y localización de las inconformidades sociales. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) siempre ha hecho un seguimiento de este tipo; la sociedad tiene que hacerlo para adquirir conciencia de cuán falso es el mito de nuestra pasividad. La organización social es un asunto de supervivencia. Resulta ya disfuncional la corrupción, ineficiencia e insensibilidad de los partidos. Nadie nos atenderá si guardamos silencio. No hay tema pequeño. La regeneración de México se inicia defendiéndonos de las cableras y las telefónicas y los desarrolladores y de los Gobiernos que los arropan cada día y con perseverancia. Participar en la vida pública debe formar parte de nuestra cotidianidad; como reunirse a comer con la familia los domingos. La exclusión es inaceptable e intolerable; tenemos que tomar el control de una democracia secuestrada por quienes monopolizan lo público para su propio beneficio. La receta es simple: si queremos reducir los abusos tenemos que organizarnos. La miscelánea Amplió las ideas expresadas en esta columna en una versión revisada del octavo capítulo, "Salvar la democracia construyendo capital social", del libro "Remolino. El México de la Sociedad Organizada, los Poderes Fácticos y Enrique Peña Nieto". Los lectores interesados podrán descargar gratuitamente dicho texto desde mi página y desde www.editorial-ink.com/remolino/cortesia Espero que sirva para quienes, como yo, consideramos indispensable y saludable la participación ciudadana en la vida pública. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.elnorte.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=34008> Fecha de publicación: 20-08-2014

FECHA: 05-11-2014

Los urbicidas .- Con un abrazo para Diego Valadés.

El urbicidio es la destrucción deliberada de una urbe. Se ha hecho común en las guerras; al Distrito Federal se le está agrediendo con la complacencia y complicidad de la izquierda que gobierna. El 20 de octubre Miguel Ángel Mancera removió a Simón Neumann como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Cuando entró al cargo se insistió en posibles conflictos de interés por su largo historial como constructor. Durante su polémica gestión se confirmaron los pronósticos y se multiplicaron las quejas de los vecinos de centenares de barrios y colonias deterioradas por miles de construcciones que brotaron como hongos para disfrute de las constructoras. Seduvi fue coronada, sin misa ni ritual, como la Santa Patrona de los Depredadores Urbanos, mientras Mancera y la Asamblea Legislativa del DF se hacían los desentendidos. Enrique Fernández del Valle es un vecino que estudia a la capital porque la ama (es uno de los promotores de Suma Urbana). Él me entregó un paquete de datos tomados de la Gaceta Oficial del DF para documentar una conspiración urdida por unos cuantos para beneficiarse con el suelo capitalino. El entramado confirma que, en el mejor de los casos, Neumann incurrió en un grave conflicto de interés. En la Ley de Desarrollo Urbano y en su Reglamento existe un concepto aparentemente inocuo llamado "transferencia de potencialidades". Los propietarios de un edificio o un predio pueden hacer un trámite ante la Seduvi para añadirle más pisos a la construcción o reducir el espacio verde a cambio de una contribución en dinero que se entrega a un Fideicomiso del Gobierno del DF que, en teoría, lo utiliza para la preservación de otros lugares (es un misterio el destino de los fondos recaudados

durante los últimos años). En realidad, la Seduvi maneja la "transferencia de potencialidades" de una manera opaca. Se desconocen los criterios que emplea aunque sí es posible asegurar que ha favorecido discrecionalmente a socios, amigos o benefactores. Lo demostraré comparando seis propiedades que redujeron área libre por medio de esta práctica entre 2013 y 2014 . Una pertenece a la Orden de los Predicadores (los dominicos) que realiza desde hace décadas una encomiable pastoral universitaria en el conocido Centro Universitario Cultural pegado a la UNAM. Las otras cinco son propiedad de Banca Mifel que tiene entre sus objetivos el "desarrollo urbanístico". Los dominicos afectaron 75 metros cuadrados y Banca Mifel 3 mil 886. La verdadera disparidad aparece cuando se compara el potencial de construcción, es decir, los pisos que se podrían construir sobre ese terreno. Los frailes podrán utilizar el permiso para edificar hasta 225 metros; en cambio Banca Mifel y sus socios hasta 107 mil 268 en las zonas más exclusivas de la capital. Por ejemplo, en la Torre del Ángel, de Paseo de la Reforma 342, Mifel le pagó al GDF 99 pesos por metro adicional construido; los dominicos 2 mil 283 pesos. La diferencia porcentual de 2 mil 206 por ciento muestra un trato preferencial de la Seduvi a Banca Mifel posiblemente debida a que Neumann fue integrante del ¡Consejo Hipotecario del Grupo Financiero Mifel! Pese a estos conflictos de interés, el Jefe de Gobierno encargó a Neumann dar seguimiento a los Centros de Transferencia Modal que serán polos de "desarrollo" urbanístico. Es erróneo que quien supervisará es quien otorgó la concesión cuando dirigía Seduvi, a través de la paraestatal Calidad de Vida, a dos empresas españolas (Inveravante y Desarrollo Urbanístico Chapultepec S.A.P.I. de C.V. de BBVA Bancomer) en una de las zonas de más plusvalía capitalina. Por cierto, fue una concesión en la que la Contraloría del DF encontró diversas irregularidades. La ciudad requiere modernizarse, es cierto, pero los capitalinos debemos tener certeza que las construcciones no están sirviendo para la especulación urbanística que termina destrozando la ya vapuleada calidad de vida. ¿Qué le pasa a la izquierda en el Gobierno? Tuvo que suceder la tragedia de Iguala para que empezara a tomar medidas para frenar la infiltración del crimen organizado en sus filas. Por ahora se quedan impávidos ante una corrupción que los está devorando en la capital. Le deseo a Miguel Ángel Mancera una pronta recuperación de sus males físicos y le sugiero que aproveche este reposo obligado para reconsiderar si seguirá haciéndose el desentendido hacia un urbanismo salvaje que corrompe a Gobierno y partido. Colaboraron Paulina Arriaga Carrasco y Enrique Calzada Villanueva.

www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio
 Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.elnorte.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=39749> Fecha de
 publicación: 05-11-2014

2015

FECHA: 17-06-2015

La honestocracia .- Buenas noticias.

La agenda de prioridades se redefine porque algunos vencedores en las elecciones prometen lanzarse contra los corruptos. Cumplirán si la sociedad los acompaña y vigila. Coincidió con Andrés Manuel López Obrador: la prioridad debe ser acabar con la deshonestidad. Es un buen punto de partida para la regeneración. Morena tendrá mucho trabajo porque regresa a una ciudad deteriorada por la epidemia de moches, abusos e ineptitudes que brotan por doquier. El urbanismo salvaje ha destrozado los bosques del sur y los barrios y colonias de la ciudad. Ha sido un negocio fenomenal para algunos empresarios y funcionarios. Tomando como base cifras oficiales en marzo ("Conjura defeña", 4 de marzo de 2015) aseguré que, en una década, los cambios de uso de suelo ilegales generaron ingresos ilícitos por 203 mil millones de pesos. El gobierno de Miguel Ángel Mancera guardó silencio. Andrés Manuel y Morena tienen competidores. Los triunfadores en Nuevo León y Jalisco también aseguran que limpiarán la mugre y ordenarán la casa. Ninguno da detalles sobre cómo lo harán, pero su discurso confirma que algunos gobernantes entienden el hartazgo social por el saqueo. Aquel que rinda mejores cuentas en ese terreno engrosará la creciente lista de precandidatos a la Presidencia. La competencia se da en todos los niveles. Las victorias capitalinas de Morena metieron inmediatamente a Ricardo Monreal como candidato a la Jefatura de Gobierno capitalina de 2018. Gobernará la delegación Cuauhtémoc donde se concentra el mayor número de puntos de distribución de drogas en la capital. Por tanto, para erradicar la corrupción tendrá que manejar el gigantesco problema de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. La geografía sazona el guisado político capitalino. La Cuauhtémoc colinda con la Miguel Hidalgo donde triunfó Xóchitl Gálvez. Ante la mortandad de los cuadros históricos del PAN, Xóchitl llega con una frescura, carisma y enjundia que opaca a un panismo capitalino deslavado. Llega, además, con el hambre de quien desea obtener un reconocimiento que le han regateado una y otra vez. En la Miguel Hidalgo el nido de corrupción anida en las construcciones ilegales. Ninguno de los arriba mencionados la tendrá fácil. La corruptocracia está bien atrincherada en la sociedad y el Estado y hasta ahora ha sido capaz de derrotar a quienes la han amenazado. En 1982, Miguel de la Madrid llegó a Los Pinos decidido a combatirlos y fue derrotado. Terminó jugando el triste papel del telonero que preparó el escenario para que Carlos Salinas de Gortari se dedicara a vender bienes públicos que fueron el trampolín para multimillonarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. En 2015 no se dejarán. Y el primer aviso llegó diez días después de las elecciones. Esta semana la Asamblea Legislativa del DF intentó dar un albaño y aprobar, en una sesión extraordinaria, el cambio de uso de suelo de 50 predios. Inspirados en la impunidad de que disfruta el Partido Verde están dispuestos a cumplir, supongo, con algún compromiso pactado con los "desarrolladores", a sacar el dinero para cubrir adeudos incurridos en la campaña o a llevarse la última tajada, esa que les endulzará el tiempo que podrían estar fuera del presupuesto. Fue alentadora la rapidez de reacción de las organizaciones vecinales de la capital. Gracias a ellas se logró detener, por ahora, el atraco. Suma Urbana, entre otras, denunció inmediatamente lo que intentaban hacer los asambleístas ante la pasividad de Miguel Ángel Mancera que también quiere ser Presidente. El desenlace es incierto aunque Morena ya se opuso. La honestocracia se consolidará si se ve acompañada y vigilada por la sociedad organizada. La situación es novedosa. El impulso a favor del cambio se está dando en ciudades -Monterrey,

Guadalajara y el Distrito Federal- con niveles altos de tejido social -organismos sociales y empresariales, medios independientes y ciudadanía informada. De este empuje social depende el avance, retroceso o estancamiento de la regeneración. Es notable la fluidez de los acontecimientos. El enojo social se reflejó en las urnas y abrió algunos resquicios a la esperanza. Corresponde a quienes gobiernan demostrar con hechos quién tiene más imaginación y consistencia en la limpieza de la casa; toca a la sociedad organizada acompañarlos y acicatearlos. De manera simultánea se libra una guerra de movimientos y de trincheras. Así de simple y de complicado es el cambio. Colaboró Maura Álvarez Roldán. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=64988> Fecha de publicación: 17-06-2015

FECHA: 22-07-2015

Cué y Toledos .- Gabino Cué es arquetipo de los gobernantes que traicionaron sus promesas; Francisco Toledo es ejemplo de compromiso ciudadano.

Esto sucede en Oaxaca, pero podría ser en casi cualquier ciudad mexicana. En 2010 la mayoría de los oaxaqueños se embriagaron de "gabinomanía" convencidos por una coalición de partidos -PAN, PRD, Convergencia y PT- y organismos ciudadanos. Gabino ganó la gubernatura y parecía que Oaxaca se convertiría en cornucopia de transformaciones tan apetitosas como su gastronomía. "Oaxaca ya tiene otro rostro", presumió Cué el día de la victoria, para luego hacer una promesa: "voy a aplicar la ley". El pasado jueves 16 de julio, Cué escuchó en la capital los reclamos por su capitulación frente a la poderosa Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En respuesta a una diputada se interroga a sí mismo: "Qué hace el Gobernador de Oaxaca cuando llegan mil maestros a tomar una instalación", y luego se explica: "yo, diputada, necesito cuando menos 3 mil elementos para desbloquear eso", lo cual es imposible porque es el total de la policía estatal. Gabino Cué sufre de amnesia ética. La capital de Oaxaca está llena de las heridas y cicatrices causadas por el urbanismo salvaje. Iniciaba 2014 cuando el Secretario de Turismo, José Zorrilla, anunció que se preparaba el proyecto de un Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, principal pulmón verde de la ciudad y un espacio de enorme simbolismo histórico y cultural. Once meses después, en noviembre, Zorrilla tuvo que excusarse de seguir participando por estar inmerso en un conflicto de interés; es copropietario del Hotel Victoria, vecino del Centro de Convenciones y, por tanto, beneficiario directo de esta construcción de 600 millones de pesos de recursos públicos. Una vez más, se repite la historia del funcionario agraciado, como por arte de magia, por la obra pública. Gabino minimizó el hecho diciendo que Zorrilla es socio pero no dueño. Si no hay problema, ¿por qué se excusó de participar?, ¿cuántas acciones tiene?, ¿quiénes son los otros socios? Lo único que sabemos es que Zorrilla sigue en el cargo y que es tan cercano a Cué que el día de las elecciones en el 2010 Gabino instaló su cuartel general en el Hotel Victoria. Con esa actitud el Gobernador se convierte en cómplice de cualquier irregularidad y en presunto beneficiario de las posibles ganancias. Al paso que va, pronto veremos aparecer en pantalla a Cué, muy serio diciendo que "Gabino y el Verde sí cumplen". El ataque al Cerro del Fortín provocó una revuelta ciudadana que tiene como principal promotor a Francisco Toledo, un artista juchiteco de 75 años que sigue poniendo recursos, prestigio y tiempo a causas de beneficio general. El Frente en Defensa del Fortín hace peticiones justas al Gobierno estatal: diálogo serio con la ciudadanía, respeto a la

legalidad y el medio ambiente, transparencia y honestidad. Visité Oaxaca y me quedé con la impresión de que la defensa del Cerro del Fortín tiene buenas posibilidades de éxito. Su argumentación es sólida, su crítica certera y sus peticiones sensatas. Por ahora, el proyecto ya entró al grueso catálogo de conflictos de interés. El proceder de Toledo trae a colación, una vez más, el asunto de la participación ciudadana bajo la premisa, verificable, que cuando el involucramiento es positivo beneficia a la democracia. En México se participa poco y por eso mismo se espera que aquellos con conciencia, tribuna o reconocimiento donen parte de su tiempo o recursos al interés general. Es indispensable y urgente un mayor involucramiento porque el País vive un estado de emergencia. En las décadas que llevo estudiando nuestro sistema político jamás había visto tan debilitado y desorientado al Estado mexicano. Es un actor vapuleado y zarandeado por los poderes fácticos entre los cuales destaca por supuesto, aunque no solamente, la delincuencia organizada. Involucrarse en asuntos públicos es un imperativo pragmático. La acción organizada puede frenar la voracidad o los desatinos de los malos gobernantes y puede apuntalar a quienes hacen un esfuerzo por gobernar pensando en las mayorías. No todos son corruptos. Actualmente, comprometerse es actuar en legítima defensa. Cué habló mucho como candidato pero hasta ahora ha sido rehén de los maestros de la Sección 22 (imposible anticipar las consecuencias de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública) y vasallo de los depredadores urbanos. Toledo es más bien hermético pero ¡cuánto ha hecho por su Estado! Necesitamos más, muchos más Toledos y menos, bastante menos, Cués. Colaboró Maura Álvarez Roldán. @sergioaguayo www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=67477> Fecha de publicación: 22-07-2015

FECHA: 02-09-2015

Urbanismo salvaje .- Las ciudades mexicanas han sido devastadas por desarrolladores deshonestos, funcionarios corruptos e integrantes del Poder Judicial inmorales.

Afortunadamente, hay ciudades con vecinos organizados que se benefician de reformas legales y jueces honestos. El urbanismo salvaje tenía cadencia y lógica. Primero se daba el cambio subrepticio en el uso del suelo; luego venía la construcción acelerada para sorprender a vecinos indefensos porque jueces y magistrados les negaban el interés jurídico o legítimo. La destrucción de tejido social tenía, entre sus consecuencias nocivas, abrir espacios al crimen organizado. El negocio fue fabuloso. En la capital una organización, Suma Urbana, calculó en 4 mil los edificios ilegales construidos al amparo de la Norma 26 durante la última década. Si se usan las estimaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) esa actividad generó ingresos ilícitos por unos 203 mil millones de pesos. La destrucción provocó la reacción vecinal y metió el tema a la agenda pública. El martes 25 del mes pasado las agrupaciones vecinales organizaron un foro llamado La ciudad que merecemos: de la ciudad de los Palacios al caos inmobiliario, al cual asistieron legisladores y delegados electos. Los vecinos demostraron que saben protestar y proponer. Llevo estas generalizaciones a una batalla concreta porque el desenlace es muy importante. Desde hace 34 años paso todo el tiempo que puedo en un condominio de Jiutepec, Morelos, que comparte espacio con colonias populares y comunidades atrapadas entre lo rural y lo urbano. En 2009 gobernaba el municipio el ahora senador por Morena (ex PRD) Rabindranath Salazar. Para buscar otro cargo dejó como interino a un tal Alejandro Cruz que rápidamente armó la aprobación, en septiembre de aquel año, de un cambio

de uso de suelo que autorizaba la construcción de 235 viviendas donde sólo podían construirse 40; era una ilegalidad absurda porque el conjunto carecía de agua potable o drenaje. Se beneficiaba una empresa, Tecnoirbe, que contaba con la protección de Hugo Salgado, entonces secretario de Turismo del gobernador panista Marco Antonio Adame. La típica complicidad empresarios-funcionarios que devastan los entornos para su beneficio. Se unieron vecinos de condominios, comunidades y colonias para protestar y pedir freno a lo ilegal. Nada pasó. La empresa derrochaba la arrogancia de quienes cuentan con el respaldo de gobernantes, leyes y jueces que respondían a la medida de sus intereses. De ahí nació una organización permanente, la Unión de las 900 Hectáreas -participo en ella-, que entre otras medidas interpuso acciones legales aprovechándose de que había un abogado experimentado en esos temas (Roberto Soto Castor). La historia jugó a favor de los vecinos. El 10 de junio de 2011 se incorporaron a la Constitución los derechos humanos y en 2013 cambió la ley de amparo. Pasaron cinco años de idas y vueltas en los tribunales. El de Morelos (Contencioso Administrativo) desechó la queja vecinal invocando falta de interés jurídico y legítimo. El Tribunal Federal Colegiado integrado por Nicolás Nazar Sevilla, Enrique Magaña Díaz y Ricardo Ramírez Alvarado- amparó a los vecinos con un fallo de gran trascendencia para quienes desean frenar el urbanismo salvaje. Resolvió que los vecinos sí tienen "interés legítimo" en asuntos ambientales y que el tribunal de Morelos debía reponer el juicio con ese principio. Los jueces de Morelos obedecieron pero, en lugar de declarar ilegal la acción, regresaron el asunto al punto de partida. La decisión corresponderá al gobierno municipal que sigue en manos del PRD. La batalla está inconclusa pero por ahora el fallo del Tribunal Federal representa una bocanada de esperanza para los vecinos agredidos por las construcciones ilegales. En la batalla por el uso del suelo nos jugamos calidad de vida, Estado de derecho y antidotos contra la violencia criminal que se infiltra por la destrucción del tejido social y urbano. Frenar el urbanismo salvaje es un asunto de ética pública y seguridad nacional. · LA MISCELÁNEA Yasmín Esquivel es una magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF que se ha distinguido por proteger a los depredadores urbanos y por incurrir en conflictos de interés. Pese a la evidencia, Miguel Ángel Mancera la nominó para que la ALDF la ratificara en el cargo y ahora se evade con excusas infantiles. ¿A quién sirve el jefe de Gobierno?, ¿a la ciudadanía o a las constructoras? Colaboró Maura Álvarez Roldán. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA
NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=70516> Fecha de
publicación: 02-09-2015

FECHA: 30-09-2015

La magistrada .- A la memoria de Hugo Gutiérrez Vega.

Miguel Ángel Mancera y el Partido de la Revolución Democrática me recuerdan a los conversos que abjuran de sus errores después de experimentar una revelación. Andan prometiendo que ahora sí escucharán con respeto a la ciudadanía y adoptarán causas tan sentidas como el desorden urbanístico. El 17 de septiembre Miguel Ángel Mancera se presentó ante la Asamblea Legislativa para rendir su Tercer Informe. Ese día reiteró su deseo expresado varias veces durante el año de que "la ciudad crezca de manera ordenada". También proclamó su compromiso con el "urbanismo social" y su disposición para que "sea la ciudadanía, que se oiga bien, la ciudadanía" la que decida sobre las grandes obras de la capital. Como prenda entregó, en ese momento, una

iniciativa "para que no se sigan cometiendo abusos por los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo". Ese mismo día se reunió el Congreso Nacional Extraordinario del PRD, que tres días después, entregó ocho cuartillas pletóricas de autocritica y juramentos de enmienda. A partir de ahora el PRD será la "fuerza que combata a fondo la corrupción en todos los niveles" y mostrarán su repudio a los malignos "moches" promoviendo ¡"las contralorías ciudadanas"! Aún hay más: todas sus propuestas estarán "fundamentadas y trabajadas con expertos y avaladas por la sociedad civil". Insinuaron, aunque no lo dijeron abiertamente, que se sumarán a la cruzada de Mancera contra el urbanismo salvaje. La transmutación de don Miguel Ángel y del PRD forma parte del cortejo a los votantes, de la irrupción de Morena en la capital (en este tema han superado mis expectativas) y de que los vecinos se organizan cada vez mejor para enfrentarse a los depredadores urbanos y sus aliados en el gobierno. Mancera y el PRD capitalino tendrán en los próximos días una excelente oportunidad para demostrar que su conversión va en serio. Basta con que dejen de respaldar la ratificación de Yasmín Esquivel Mossa como magistrada de la Sala Superior de lo Contencioso Administrativo. En agosto pasado Mancera la propuso. Cuando surgieron las críticas al personaje se justificó de una manera por demás barroca. Declaró que Esquivel Mossa es una "servidora pública que no comienza con mi administración". Lo que quiso decir es que su pelea con Marcelo Ebrard no le impide apoyar a doña Yasmín. La magistrada cuenta con un historial que le permitiría ser nominada para Patrona de los Conflictos de Interés. Solo con su actuación en la Supervía Poniente basta para llevarse el galardón. Entre los constructores de esa obra, que generó un profundo rechazo ciudadano y provocó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, estaba una constructora propiedad de José María Riobóo, esposo de la magistrada (otra constructora es la ya célebre OHL). Ella prometió excusarse por el gigantesco conflicto de interés pero cuando una Sala del Tribunal de lo Contencioso donde trabaja resolvió que la Supervía se edificaba de manera ilegal, doña Yasmín dio marcha atrás y retuvo el expediente durante 20 meses sin dictar resolución, con lo cual logró que Marcelo Ebrard pudiera terminar una de las autopistas más caras del mundo, por cierto ocupa el segundo lugar. En enero de 2012 la magistrada fue nombrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso. Cuento con una relación de 17 cuartillas enumerando irregularidades cometidas por una magistrada más preocupada por servir a los poderosos que por proteger a los ciudadanos afectados por los abusos urbanísticos. No es una excepción porque los gobernantes y partidos colonizan los tribunales para poner a sus cómplices o amigos. Necesitamos órganos impartidores de justicia autónomos y profesionales. En un atropellado proceso, Mancera y el PRD ratificaron a Esquivel Mossa cuando agonizaba la anterior legislatura. Los nuevos asambleístas tendrán que ratificarla o rechazarla. Antes de hacerlo deberían investigar en serio su historial y su gestión como presidenta del Tribunal. Morena, por cierto, se comprometió a revisar el caso. Esta magistrada, en mi opinión, ejemplifica la parcialidad en los tribunales. Los ciudadanos no necesitamos de tantas alabanzas. Bastaría con que nuestros argumentos fueran atendidos por jueces y magistrados honestos y autónomos. Si insisten en ratificar a esta magistrada, estimado jefe de Gobierno, respetados perredistas, su conversión es demagogia en su estado químicamente más puro. Colaboró Maura Álvarez Roldán.

www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:

<http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=72550>

FECHA: 30-12-2015

Otro balance .- Políticos y partidos se presentan como los orfebres del cambio histórico.

En ocasiones tienen razón, pero no siempre. En 2015 la sociedad organizada fue protagonista y quienes gobiernan hicieron más concesiones de las habituales. ¿Se mantendrá la tendencia en 2016? El enojo social crece y se expresa de manera organizada. En el Distrito Federal hubo 5 mil 935 manifestaciones en 2011 y 9 mil 111 en 2014, un aumento de 53% en solo tres años! (Isabel Becerril, El Financiero, 4 de junio de 2015). Tengo la impresión que en 2015 crecieron las protestas por todo el país y algunas de ellas tuvieron grandes éxitos: el amparo para consumir mariguana, el paro del proyecto del Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín en Oaxaca, las candidaturas independientes o las luchas centradas en Ayotzinapa. Aquí revisaré dos de esos temas de relevancia nacional. El Partido Verde prostituyó el ambientalismo y ha lucrado con él desde 1988. Ha prosperado porque su corrupción ha sido funcional para el PRI y las televisoras y porque ha gozado de la protección de las autoridades electorales. El año 2015 fue malo para ellos. En la primera parte, una campaña ciudadana exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) quitarles el registro. Se salvaron porque sólo cuatro consejeros del INE respaldaron la solicitud mientras que otros siete se atrincheraron en el silencio o en teorías a modo para obedecer una instrucción girada, probablemente, desde el PRI y las televisoras. Se consolidó el prestigio del Verde como partido corrupto y canalla. Semanas después, el presidente Enrique Peña Nieto cometió el desa-tino de nombrar a un presunto delincuente electoral, al verde Arturo Escobar, como subsecretario de Gobernación encargado de prevenir el delito (luego se sorprenden de que se les critique su incongruencia). La exigencia de removerlo de diferentes organizaciones se cumplió cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) obtuvo una orden de aprehensión contra Escobar y él terminó renunciando al cargo. Estas sacudidas enmarcan acontecimientos chiapanecos. El diputado del Partido Verde que representaría a los migrantes ganó con trampas por demás groseras. Cuando se difundieron los engaños, el Congreso de Chiapas controlado por el PRI y el Verde le quitó la curul; pero lo más notable fue que ¡el partido expulsó al delincuente electoral! Esta actitud es rarísima porque el Verde premia, no castiga esas conductas. En el 2016 ese partido será candidato a chivo expiatorio cuando el oficialismo sienta la necesidad de probar su compromiso contra la corrupción. El segundo asunto fue la disputa por el Corredor Chapultepec que se enmarca en el urbanismo salvaje que ha destrozado a las ciudades mexicanas. En una lamentable degradación, buena parte de la izquierda que gobierna la capital desde 1997 le entró al saqueo, lo que fue despertando la conciencia y forzó la organización de vecinos de múltiples colonias. Apoyándose en especialistas en varias disciplinas y en algunos medios de comunicación fue urdiéndose un tejido social que entendió las mañas usadas para enriquecerse con los cambios en el uso de suelo. En la mayoría de las ocasiones los vecinos fueron derrotados pero 2015 fue diferente. La batalla por el Corredor Chapultepec mostró la articulación y sofisticación de un movimiento que incluyó a vecinos, académicos, especialistas, periodistas y algunos funcionarios, además de buena parte de Morena y unos cuantos panistas. El eslogan #AsíNo sintetizó el rechazo a la opacidad y la corrupción y expresó las aspiraciones de quienes deseamos una ciudad diferente, más humana y con mejor calidad de vida. En su artículo "Las lecciones del #AsíNo", María Amparo Casar hace un espléndido recuento de las irregularidades incurridas por las autoridades (Excélsior, 9 de diciembre de 2015). Una de las tareas más difíciles en las ciencias sociales es determinar por qué se inconforman y rebelan las personas y los grupos sociales. Hay suficiente evidencia para asegurar que durante 2015 se expresaron por todo el país las inconformidades y que se lograron éxitos poco comunes en asuntos paradigmáticos. Es posible que en 2016 se mantengan estas

tendencias y que las brisas del cambio se transformen en un ventarrón que arranque y se lleve algunas costras de mugre acumulada. Ese es uno de mis deseos de año nuevo que espero, en el terreno discutido, sea tan fructífero como el que ahora termina. Colaboraron Maura Álvarez Roldán y Emilio González González. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=78886> Fecha de publicación: 30-12-2015

2016

FECHA: 03-02-2016

Togas cómplices .- La doctora Alicia Ávila está convencida que "existe una red de delincuencia organizada que comienza en la delegación y llega hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (el Tribunal)".

Analizo la afirmación. Alicia, pedagoga con Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vivía tranquila en la Guadalupe Inn de la Ciudad de México hasta que, en 2014, empezaron a construir un edificio de 15 pisos en la calle Gutty Cárdenas, 113. Ella y otros vecinos visitaron 70 veces ocho dependencias: la delegación Álvaro Obregón, cuatro oficinas del gobierno central, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Asamblea y el Tribunal (instancia, ésta última, que resuelve los conflictos entre particulares y autoridades). Para esta columna se revisaron los casos de la Supervía Poniente, la Torre Mitikah en Xoco, un Club de Golf en Tepepan y el edificio en la calle Gutty Cárdenas. Primer hallazgo. Las autoridades usan la ley para vulnerar la justicia. Siempre hubo una dependencia del gobierno capitalino y algún magistrado del Tribunal dando la razón a los vecinos pero la Sala Superior del Tribunal revirtió los fallos (está pendiente el del Club de Golf) invocando ausencia de interés jurídico de los quejosos o interpretando con estrechez la norma. En los magistrados influyó que el gobierno del Distrito Federal respaldó a las empresas pese a que alguna dependencia capitalina reconoció la violación de la ley. Segundo hallazgo. Destrozar una ciudad no está tipificado como delito de crimen organizado pero sí hay señales de un "entendimiento" para lucrar de manera organizada con el suelo de la capital; acuerdo en el cual participan, por acción u omisión, un buen número de constructoras y todas las autoridades. Esto lo corrobora la determinación con la cual niegan, minimizan o ignoran los conflictos de interés. El esposo de la actual presidenta del Tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, era uno de los constructores de la Supervía y la magistrada, en lugar de excusarse, participó en los procesos que quitaron la razón legal a los quejosos. Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza aprobó la Torre Mitikah, en su calidad de director general de Regulación Ambiental en el periodo de gobierno de Marcelo Ebrard, pese a ser socio de una de las constructoras. En lugar de sanción y absolución hubo premiación. Los odios políticos se olvidan con negocios inmobiliarios. Veamos un ejemplo. Marcelo Ebrard propuso a Yasmín Esquivel como magistrada del Tribunal y su sucesor y enemigo, Miguel Ángel Mancera, solicitó su ratificación como magistrada en agosto de 2015 con todo y denuncias en su contra. Como los asambleístas terminaban su gestión la reeligieron por unanimidad para un periodo de tres meses. El presidente de la Comisión de Gobierno de la nueva Asamblea es Leonel Luna -fue delegado de Álvaro Obregón cuando se aprobó el edificio de 15 pisos en Gutty Cárdenas- quien, aliado con un priista, empujó la causa de Esquivel. Ese mismo mes, Mauricio Toledo (otro depredador urbano, pero en Coyoacán) presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que aprobó

un aumento en el presupuesto del Tribunal. Morena ha sido ambivalente en este caso porque denuncian la corrupción inmobiliaria, sin embargo, el esposo de la magistrada ha sido vinculado a Andrés Manuel López Obrador. En la última década se han construido más de cinco mil edificios de manera ilegal. Algunos vecinos se han resistido pero es rarísimo que logren frenar las edificaciones. Las constructoras y sus cómplices en el gobierno han erigido una fortaleza inexpugnable. La CDHDF de Luis González Placencia respaldó a los vecinos en el caso de la Supervía y en parte por ello perdió la reelección. Tal vez por ello la nueva presidenta de la CDHDF fue tibia con la obra en Gutty Cárdenas. Los vecinos están totalmente solos. Los tribunales de lo Contencioso Administrativo han sido copartícipes del desastre urbanístico de la mayoría de las entidades. ¿Existe solución? En la Ciudad de México el Tribunal podría autorreformarse, la Asamblea auditar al Tribunal y el Constituyente incluir el tema en la agenda. Se ve difícil que suceda. Los vecinos de Gutty Cárdenas intentarán llevar su caso ante la Suprema Corte. Merecen apoyo porque el máximo tribunal tiene las atribuciones para domar a quienes emulan, con sus métodos, a la delincuencia organizada; de no hacerlo, los depredadores seguirán galopando en libertad por las praderas del urbanismo salvaje. Colaboró con información e ideas Emilio González González. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=81267> Fecha de publicación: 03-02-2016

FECHA: 13-07-2016

Carta a la CNTE .- Envío esta carta, como profesor durante varias décadas y habitante de la capital, a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Puede serles de utilidad ya que muchos de ustedes vienen de otras entidades. Los chilangos vivimos en la incertidumbre. Somos los esclavos de un transporte público atestado, de un tráfico caótico que va sorteando baches y deteniéndose en los cuellos viales causados por un urbanismo tan salvaje como el neoliberalismo que ustedes denuncian. Para llegar a tiempo al trabajo o a cualquier otro lado tenemos que afinar al máximo el arte de la logística, los atajos y los planes alternativos. Este suplicio se sale de cauce cuando hay marchas o bloqueos. En 2013 por nuestras calles pasaron casi 8 mil manifestaciones (22 diarias en promedio), la mitad de las cuales fueron por agravios cometidos en otras entidades. Los contingentes magisteriales están entre los más temidos. En el documento que le entregaron a la Secretaría de Gobernación el pasado 5 de julio informaron a las autoridades y a la sociedad que quieren educar pensando en la "solidaridad y el respeto", en el "interés general" y en la "mejor convivencia humana". Luego añaden -sin mencionar la palabra bloqueo en su cuidado texto- que la "acción política" que ustedes desarrollan en "las calles" no refleja su "forma de actuar y vivir". Cuando uno conversa con ustedes añaden que la única manera de ser atendidos es paralizando carreteras y vialidades. Acepto y respeto su derecho a expresarse y protestar públicamente. Sin embargo, sus bloqueos en la Ciudad de México se han convertido en una agresión sistemática y metódica contra quienes habitamos el Valle. En lugar de agruparse en uno o dos contingentes que cierran accesos a las sedes de las instituciones encargadas de sus asuntos, la semana pasada ustedes organizaron bloqueos coordinados de hasta 15 puntos de la ciudad. La consecuencia fue un caos del cual, lo sé, también es responsable una autoridad que tiene la obligación de armonizar sus manifestaciones con el derecho a la movilidad. Quienes gobiernan la ciudad deberían conciliar

derechos. En lugar de ello se han sumido en la parálisis. En noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una sólida recomendación al Gobierno capitalino pidiéndole que estableciera criterios para conciliar derechos de inconformes y habitantes. Lo ha seguido haciendo sin que le hagan caso. Lo mismo sucede con el Gobierno federal que en obras como la salida a Cuernavaca presume el profundo desprecio que tienen a la ciudadanía. La explicación más lógica a tanta indiferencia es que las autoridades obtienen beneficios de que el espacio público sea aprovechado para fines privados por constructores sin escrúpulos o restaurantes de lujo, por ambulantes encuadrados en organizaciones corporativas, por los narcomenudistas que llevan y traen su mercancía, etcétera. En el último de los casos los bloqueos con los cuales ustedes, maestros de la CNTE, nos arruinan la ya de por sí difícil vida capitalina reflejan el deterioro generalizado de nuestra democracia. Si las elecciones, prioritarias y costosas, se envilecen con la compra y coacción del voto y con los ríos de dinero negro, resultan totalmente naturales las perversiones de la democracia participativa. Leo sus textos, profesores de la CNTE, y les creo cuando describen las paupérrimas condiciones de buena parte de la infraestructura educativa y la precariedad en las condiciones laborales. También les creo cuando aseguran que están luchando por un futuro mejor. Me resulta contradictorio y absurdo que quieran construir ese futuro agrediendo con sus bloqueos a millones de personas. Lo mismo pienso de algunos de sus aliados. Un colega de El Colegio de México, Manuel Gil Antón, conoce a fondo la problemática magisterial. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen o lo han leído. En su último texto para El Universal ("¿Problema o solución?", 2 de julio de 2016) resumió en unas cuantas frases mi sentir: "reforma educativa sí, pero no así. Lo mismo vale para expresar: protesta sí, pero no así. Vejar, hacer escarnio o dañar a otros no es vía: desbarranca". Colaboraron Rodrigo Peña González y Maura Roldán Álvarez. @sergioaguayo
www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA
PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=92693> Fecha de
publicación: 13-07-2016

FECHA: 21-09-2016

Albazo Augusto.- ¿Por qué decidieron PRD, PAN y PRI nombrar al veterano Augusto Gómez Villanueva como pastor de los cien personajes que darán Constitución a la Ciudad de México?

Les propongo una explicación. PRD-PAN-PRI se sienten identificados con la maleabilidad ideológica de Augusto. En 1968 repudió al Movimiento del 68 y respaldó la dureza de Gustavo Díaz Ordaz (la ocupación militar de Ciudad Universitaria era correcta porque, según Augusto, había "llegado la hora de restablecer el orden"). Evangelizado por el fervor revolucionario de Luis Echeverría Álvarez en 1975 proclamó emocionado que en la Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados estaban "plasmados los derechos de los campesinos del Tercer Mundo" sometidos a la "explotación económica [de] los bloques imperialistas". Seguro también influyó su experiencia en negocios inmobiliarios turbios. En 1977 la revista Proceso informó del protagonismo de Augusto en una apropiación irregular de 70 kilómetros de playas ejidales. Don Augusto respondió apeguándose a un guión que ensayan constantemente: tachó las acusaciones de "calumnias políticamente motivadas", la Procuraduría lo exoneró y él siguió adelante, alimentando lo que un cable diplomático estadounidense de 1977 llamó "un ego de tamaño monumental". Quien redactó el informe se quedó impresionado de ver "varias habitaciones de

su casa tapizadas de fotos suyas". En mayo de 2016 Teodoro González de León concedió una entrevista en Revista R de Reforma y acertadamente calificó de "desastrosa" la "política de desarrollo urbano" nacional lo que se debe, en su opinión, a la "prioridad concedida al negocio inmobiliario" (Andro Aguilar, "Una Constitución, ¡hágame el favor!", 29 de mayo de 2016). Quienes hayan leído mis columnas saben que en los últimos años he ido documentando el urbanismo salvaje que devora al país y a la Ciudad de México. El dinero que se ha manejado en la capital es enorme. En septiembre de 2015 reproduje unas cifras de Suma Urbana: según esta organización vecinal, en la década previa se habían construido 4 mil edificios ilegales en la capital bajo la Norma 26 (vivienda social y popular). Utilicé unas estimaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para poner unas cifras que ninguna autoridad ha desmentido: los ingresos ilícitos generados en esa categoría ascendieron a 203 mil millones de pesos. A últimas fechas botaron el recato. Temerosos de que Morena les gane la capital en 2018 autorizan edificios por todas las colonias, barrios y avenidas de la ciudad. Cualquiera puede observar cómo se llenan de edificios gigantescos los lados del Periférico Sur; saturarán todavía más las erróneamente llamadas vías rápidas. Al mismo tiempo avanza la mancha sobre los bosques del sur. Es cierto que el proyecto de Constitución es generoso con algunos derechos y hasta emociona visualizar el paraíso que nos prometen. Es una cortina de humo para disimular el pillaje. El 14 de septiembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un Consejo de Planeación de Desarrollo Urbano aceptado apresuradamente en comisiones una noche anterior por el PRD, el PAN y el PRI. En el pleno Morena, hay que decirlo, votó en contra. Fue un albazo porque la integración de ese Consejo de Planeación será controlado por los principales partidos en la Asamblea y por el gobierno de la ciudad. Forma parte de un tinglado muy bien urdido que probablemente se mantendrá en el Instituto de Planeación considerado en el proyecto de Constitución. El suelo de la ciudad sigue siendo controlado por un puñado de desarrolladores arropados por gobernantes corruptos. Josefina Mac Gregor es una de las dirigentes del vigoroso movimiento vecinal que enfrenta las construcciones ilegales; me responde a pregunta expresa que con el "Consejo de Planeación nos tomaron totalmente por sorpresa". Así pues, es adecuado el nombramiento de Augusto Gómez Villanueva como presidente del Constituyente capitalino. Tiene una experiencia negativa que buscan quienes quieren seguirse enriqueciendo a costa de la calidad de vida capitalina. Y para darle una acogida digna de su biografía el PRD, el PRI y el PAN aprobaron un Consejo de Planeación. Y lo hicieron como siempre: con un albazo augusto. Colaboraron Zyanya Valeria Hernández Almaguer y Anuar I. Ortega Galindo. www.sergioaguayo.org Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo

ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
<http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=97577> Fecha de
publicación: 21-09-2016

2017

FECHA: 04-01-2017

Dos actitudes .- A la memoria de Enrique Fernández del Valle.

Las denuncias y protestas tienen efectos más duraderos cuando hay organizaciones ciudadanas que les dan seguimiento. Enrique Peña Nieto es arquetipo del gobernante que mete las críticas al hoyo negro de la indiferencia. Su gusto por el dispendio se confirmó con el lamentable deceso de Rafael Tovar y de Teresa. Cuando el secretario de Cultura entró en la fase terminal, el Presidente mandó uno de sus nueve aviones para traerlo de Phoenix, Arizona, a morir en un hospital militar de la Ciudad de México. Es un gasto ofensivo porque en diciembre de 2016 México ya estaba siendo azotado por los nubarrones de la inflación y la carestía. Es un despilfarro innecesario porque, en teoría, Tovar y de Teresa estaba amparado por un seguro de Gastos Médicos Mayores que generalmente tienen una cláusula para traslados en aviones ambulancia (estoy esperando la información que solicité por Infomex para precisar lo anterior). Si el Presidente maneja así los recursos públicos, resulta lógico que Juan Manuel Carreras López, gobernador priista de San Luis Potosí, utilizara el helicóptero oficial para hacerse presente en los quince años de Rubí. Estamos ante actitudes heredadas del presidencialismo priista. En los años noventa realicé una investigación con Helena Hofbauer que publicó Reforma: demostramos que Carlos Salinas se gastó 857 millones de dólares de una partida secreta -autorizada por la Constitución- sin informar en qué y cómo los utilizó. Alianza Cívica aplicó la pinza jurídica y demandó en 1996 al presidente Ernesto Zedillo para que informara sobre el manejo de esa partida; respondió dejándola en ceros. Así sigue. En ese caso sí funcionó la investigación porque hubo quien la difundiera y le diera seguimiento. El urbanismo salvaje ha destrozado ciudades y enriquecido a funcionarios corruptos. En la capital son mayoría los delegados que se han aprovechado de los cambios en el uso de suelo. El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, guarda un silencio cómplice que favorece a los desarrolladores depredadores. Hay funcionarios capitalinos con otra actitud. En el combate a este tipo de corrupción destacan las delegadas Xóchitl Gálvez (PAN) de la Miguel Hidalgo y Claudia Sheinbaum (Morena) de Tlalpan. Sobre ellas comentaré en otra ocasión. Hoy me centro en Ricardo Monreal (Morena) de la Cuauhtémoc a raíz de un debate que se dio en la revista Nexos en los primeros días de diciembre de 2016 entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la delegación. Salvador Camarena encabezó un equipo de MCCI que publicó un texto sólido y crítico sobre la corrupción urbanística en la Cuauhtémoc. La delegación no se refugió en el silencio como Mancera o Peña Nieto, dio su versión sobre cada una de las acusaciones y luego vino la contrarréplica de Camarena y asociados. La Cuauhtémoc reconoce que no "se ha terminado el coyotaje y la corrupción en la Delegación" pero "tampoco mantiene los niveles de impunidad, sistematicidad y tolerancia que reportaba hace un año" (véanse los tres documentos en www.sergioaguayo.org). Hay quienes piensan que la respuesta de Monreal es deficiente; es posible, pero una consecuencia positiva es que Suma Urbana, Ruta Cívica y otras organizaciones utilizarán esa información en un proyecto que pronto difundirán. El "gasolinazo" ha generado una saludable efervescencia y un deseo de "hacer algo". Tan importante es protestar, como canalizar una parte de la energía a la construcción del tejido social positivo que acorrale primero, y erradique después, los dispendios y abusos cometidos por gobernantes como Enrique Peña Nieto, el Presidente que tomó el avión para irse a jugar golf con sus cuates en lugar de dar la cara por el "gasolinazo" que ordenó. · LA MISCELÁNEA Resulta lógico que también haya dos tipos de empresas. El

gobierno de Enrique Peña Nieto está pagando mil 45 millones de pesos a la constructora española Aldesa para que construya el libramiento de Cuernavaca. En el tiempo que llevan las obras, Aldesa ha demostrado el desprecio que siente hacia los usuarios que utilizamos ese camino. La falta de señalamientos es tan criminal como la tolerancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza. Colaboraron Maura Roldán Álvarez y Zyanya Valeria Hernández. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=104409> Fecha de publicación: 04-01-2017

FECHA: 05-04-2017

Salvar la CDMX .- A la memoria de Sergio González Rodríguez.

Sí es posible frenar el avance del crimen organizado en la capital y reducir el costo en sufrimiento y vidas. Estoy corrigiendo mi interpretación sobre el origen del crimen organizado en México. Suponía que en las primeras etapas la delincuencia y el Estado eran entidades separadas. El libro de Guillermo Valdés Castellanos (Historia del narcotráfico en México) y otros materiales me han llevado a reconsiderar el papel que jugó la Dirección Federal de Seguridad, DFS (creada en 1947, desaparecida en 1985). La nueva hipótesis de trabajo es que la DFS recibió el encargo de controlar y regular a la delincuencia organizada. Con el tiempo se fundieron la delincuencia y el Estado en una nueva dimensión caracterizada por la normalización de la ilegalidad. Un profesor de El Colegio de Michoacán, Salvador Maldonado, lo detectó en sus estudios. En Michoacán, escribió, "compiten muchos jugadores para comportarse como pequeños estados" y las "fronteras entre lo legal y lo ilegal son bastante borrosas". Miguel Ángel Mancera vive en la negación. Para él no hay cárteles en la CDMX; es obvio que compara a la capital con Culiacán, Reynosa o Chilpancingo. La tajante negativa choca con los informes de la DEA (Drug Enforcement Administration) y de un buen número de analistas que señalan con evidencia que en la capital operan los grandes cárteles y una constelación de cartelitos semi-autónomos. Su existencia es poco evidente porque de manera deliberada mantienen un bajo perfil. Esto se debe a que la capital tiene un mando único y un tráfico infernal; a que es la sede de los tres poderes; y a que tiene el tejido social más denso del país. Sin hacer tanta alharaca la delincuencia está creciendo en las franjas donde prevalece la ilegalidad. Dos ejemplos claros son el ambulante y el urbanismo salvaje, actividades con altísimos márgenes de ganancia. Rodrigo Peña González plantea una hipótesis sugerente. El enfrentamiento entre la legalidad y la ilegalidad es observable y medible en la manera como se usa y abusa de los espacios públicos. La verbena dominical que organiza el gobierno capitalino en el Paseo de la Reforma cerrado al tráfico es un festival de civilidad y respeto al prójimo y al Estado de derecho. El aumento explosivo del ambulante (controlan 40% de las ventas realizadas en la capital) es un ejemplo de lo contrario. Es cierto que en parte se debe al desempleo y la desigualdad; sin embargo, también se ha convertido en expresión de un corporativismo que replica los vicios del autoritarismo y es cooptado por los delincuentes. Los cárteles también se nutren de la especulación urbana. Las trácalas con el uso del suelo siempre han sido botín de políticos, funcionarios y empresarios en busca de la ganancia fácil. El nivel que está alcanzando en la capital (y buena parte del país) es escandaloso y disfuncional. En la CDMX hay miles de construcciones ilegales autorizadas por funcionarios del gobierno central y por la mayor parte de las delegaciones. Pese a que el saqueo se denuncia y documenta constantemente, el Constituyente lo deja intacto y Mancera quita obstáculos

administrativos en preparación, supongo, del atraco de fin de gobierno. Pronostico que, si los dejamos, en los próximos meses se aprobarán centenares o miles de nuevas construcciones. Estas y otras actividades están abriendo portones de oportunidad al crimen organizado. Debemos frenarlas. En lo positivo está que va creciendo la conciencia sobre lo que pasa, que hay vecinos y organismos civiles en resistencia y que los delegados de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco quieren "enfrentar la ola de aprobaciones de desarrollos inmobiliarios y evitar la pérdida de más hectáreas de suelo de conservación" (La Jornada, 27 de marzo de 2017). Estos esfuerzos deberían incorporar en sus fundamentaciones el ángulo de la seguridad y del crimen organizado. Lo estudiado hasta ahora me permite asegurar que en la capital el crimen organizado, sus aliados en la sociedad y una parte de los gobiernos están incrementando las zonas borrosas de la ilegalidad. Y dos de las actividades donde esto es más claro es el ambulante y el urbanismo salvaje. Si queremos salvar la ciudad debemos acotar esos y otros espacios de ilegalidad. Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=110293> Fecha de publicación: 05-04-2017

FECHA: 10-05-2017

Bregas panistas .- En la política mexicana hay metamorfosis inversa; transitar de mariposa a gusano.

Es el caso con aquellos panistas que brincaron de la "brega de eternidad" a la "opción preferencial" por las televisoras. Manuel Gómez Morín le heredó al PAN una brújula ética. La honestidad, escribió, es la "virtud esencial [y] más necesaria [para] México". Consciente de lo que significaba enfrentar a la Revolución hecha gobierno, lanzó una frase que se convirtió en consigna existencial para el panismo de la etapa heroica: "nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad". Hay panistas que cuando tocan el timón de mando hacen a un lado la eternidad y se concentran en la brega de la canonjía, la transa y el moche. Vicente Fox es un ejemplo preclaro de opción preferencial por las televisoras. En 1988 aterrizaba en la política y para hacerse notar pagó un desplegado de plana completa en Proceso. El texto abría con una imprecación contra el principal noticiero de Televisa: "No veas 24 Horas porque oculta la verdad". Al cruzar el dintel de Los Pinos, Fox se quitó las botas hechas para aplastar a las "tepalcates, alimañas y víboras prietas" priistas. Se puso las sandalias de terciopelo de quienes deambulan por los corredores de poder y se dedicó a cortejar a quienes antes insultaba. En 2002 hizo un "regalazo" (conocido como el "decretazo") a las televisoras al reducir el tiempo oficial del Estado que debían transmitir obligatoriamente de tres horas a 18 minutos. Hay metamorfosis similares. En 2014 Federico Döring -panista desde 1995- declaró a El Universal que "el poder saca al priista que todos llevamos dentro". Confirmó el dicho presentando en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que anula los derechos de las audiencias. Tres ejemplos: 1) al Ifetel le quita dientes porque se suprimen las multas por engañarnos y presentar propaganda o publicidad encubierta como información; 2) el defensor de audiencia y los códigos de ética se someten a la voluntad de los medios; y 3) quitan al Ifetel la facultad de suspender -previo apercibimiento- la transmisión violatoria de derechos. Acertaron los organismos civiles cuando dijeron que los diputados "estaban" vendiendo los derechos de la sociedad mexicana a cambio de los favores de las televisoras y grupos de radio comerciales". Favores pagables, supongo, en las elecciones de 2017 y 2018. Según la detallada crónica de Jenaro Villamil en Proceso (29 de

abril de 2017) el coordinador de la bancada panista, Marko Cortés, reconoció que recibieron la "orden de Ricardo Anaya", presidente del PAN, de instruir a los diputados del blanquiazul para votar con el PRI y el Partido Verde. 73 lo hicieron, 8 se abstuvieron y 10 votaron en contra. Ante semejante retroceso incluí en mi columna de la semana pasada la frase "Ricardo Anaya, el nuevo cómplice de las televisoras". A las pocas horas el responsable de comunicación social del PAN, Fernando Rodríguez Doval, me escribió para aclararme que "el presidente del PAN, Ricardo Anaya, en ningún momento pidió a sus diputados el voto favorable a dicha iniciativa, que fue presentada a título individual por el diputado Federico Döring". Escribí a este último pidiéndole una aclaración pero optó por el silencio. Se desconoce, por tanto, quién dio la orden o convenció a 73 diputados de unirse al PRI y al Verde en el atraco. ¿Anaya, Döring o alguien más? El panismo tiene una parte comprometida con el interés general. En este caso hubo 18 diputados que mostraron su inconformidad con la discreta abstención o el beligerante voto en contra. Javier Corral en Chihuahua está demostrando que la justicia de un estado sí puede combatir en serio la corrupción, en este caso la de César Duarte. La asambleísta panista Margarita Martínez Fisher es de los pocos legisladores que atienden a los vecinos en lucha contra el urbanismo salvaje de la capital. Ese es el PAN que necesita México. El PAN ya cumplió 78 años y están fuera de lugar sus faltas de definición tan comunes por ejemplo en la adolescencia. ¿Están dispuestos a defender los derechos de las audiencias o prefieren engordar las ganancias de las televisoras?, ¿desempolvarán la brega de eternidad o seguirán poniendo cirios a San Moche? ¿Mariposas o gusanos? Colaboró Maura Roldán Álvarez. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=112363> Fecha de publicación: 10-05-2017

FECHA: 13-09-2017

El andamiaje .- A la memoria de Bernardo García Martínez, historiador del Colmex.

El gobierno de la Ciudad de México esconde el Atlas de Riesgos impidiendo a los vecinos enfrentar mejor las inundaciones y otras calamidades. Miguel Ángel Mancera y su gobierno tienen la obligación de elaborar un documento sobre las vulnerabilidades y peligros que amenazan a la capital. El Atlas de Riesgos ha sido solicitado, vía transparencia, por 113 ciudadanos. También lo ha pedido Miguel Ángel Cancino, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). La Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García responde con el silencio o con negativas montadas sobre tres frases: información "reservada", "imposible físicamente entregar una copia", solo tienen "acceso" quienes "acrediten el interés jurídico". ¿Por qué tanto misterio? Una explicación, benigna, es la ineptitud: lo niegan porque no lo hicieron. Otra, más elaborada, embona con otras piezas del crucigrama ciudadano. El recientemente fallecido Enrique Fernández del Valle colaboró en su elaboración y cuando preguntó por qué no lo difundían le respondieron que se desplomaría "el mercado inmobiliario". Con el "mercado inmobiliario" maquillan el urbanismo salvaje. La Ley General de Protección Civil de 2012 tipifica como delito grave el construir o urbanizar en zonas de riesgo. De conocerlas sabríamos cuántas construcciones incrementan la vulnerabilidad y los peligros y, en el caso de las obras más recientes, tendríamos más detalles sobre la corrupción de funcionarios actuales. El Atlas de Riesgos es parte de un andamiaje más complejo que tiene como piezas centrales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, Seduvi. Un síntoma de su relevancia es que en el nombramiento del titular de la Seduvi sólo interviene el jefe de Gobierno; entonces colijo que Miguel Ángel Mancera aprueba las irregularidades cometidas por la Seduvi que se niega, por ejemplo, a entregar la lista de empresas que construyeron ilegalmente utilizando la norma para vivienda de interés social y popular. Otra dependencia clave es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo usualmente parcial hacia las inmobiliarias (la Torre Mítikah es un ejemplo clarísimo). Hasta la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) colabora. Suma Urbana presentó una queja colectiva por 1,200 denuncias presentadas por vecinos e ignoradas por la autoridad; la CDHDF cerró el expediente porque la cantidad y complejidad de los casos rebasaba su capacidad. La magnitud del andamiaje es proporcional al tamaño del negocio. La construcción de 4,500 edificios ilegales al amparo de la "Norma 26" -ya desaparecida- generó ingresos por 200 mil millones de pesos a los desarrolladores que la violaron. Ahora se utilizan figuras como los Sistemas de Actuación por Cooperación (SACs); con uno de ellos el gobierno de Mancera quiere privatizar 268.81 hectáreas de un Área de Valor Ambiental de Barranca de Tarango. La depredación de los bosques del sur tiene consecuencias que explica Luis Zambrano (Instituto de Biología de la UNAM): el "cambio de uso de suelo" en las "áreas verdes" es determinante para el "aumento de inundaciones y la reducción de infiltración de agua". Mancera rara vez habla sobre estos temas. Él inaugura eventos, filma spots, firma decretos y tolera por motivaciones que sólo intuyo- destrozos causados por inmobiliarias. Y sonríe, siempre sonríe. ¿Cómo será un gobierno de Morena en este tema? Imposible anticiparlo aunque algunos de sus líderes históricos han favorecido o tolerado la especulación urbana. Tampoco tranquilizan los antecedentes de conversos de última hora. La tribu de René Bejarano y Dolores Padierna controló durante años la delegación Álvaro Obregón, una de las más afectadas por construcciones irregulares. Tema complejo porque en la capital hay construcciones de diferentes épocas y debe seguirse construyendo y remodelando. Transformemos la CDMX respetando el entorno y tomando en cuenta las vulnerabilidades. Secuestrar el Atlas de Riesgos es, a la larga, infantil y contraproducente. Contribuyeron a esta columna Josefina MacGregor de Suma Urbana, Sergio Puente de El Colegio de México y Jorge Yáñez López de Visión Legislativa. Colaboró Zyanya Valeria Hernández Almaguer. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=119990> Fecha de publicación: 13-09-2017

FECHA: 18-10-2017

Cantinfleando .- Primero escondió el Atlas de Riesgos de la CDMX, luego lo publicó, pero cuando se criticaron sus inconsistencias reconoció que era un borrador.

Luego cantinfleó y culpó al gobierno anterior. En el trasfondo está un negocio inmobiliario multimillonario. Cuando Miguel Ángel Mancera llegó al cargo se aprobó una ley que obligaba a su gobierno a elaborar un Atlas de Riesgos que detallara las vulnerabilidades y peligros que amenazan a la capital. Lo hicieron, pero la Secretaría de Protección Civil encabezada por Fausto Lugo García decidió esconderlo con la aprobación del jefe de Gobierno. Cuando le pedían el documento respondía que estaba incapacitado para entregarlo porque se trataba de información "reservada", porque era "imposible físicamente entregar una copia" y porque sólo tendrían "acceso" quienes acreditaran el "interés jurídico". El sismo del 19 de septiembre sacó a la luz

diversas irregularidades e incrementó la presión social para que el gobierno capitalino lo diera a conocer. El 6 de octubre finalmente convocaron una rueda de prensa para mostrar el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Mancera explicó que ahora sí los capitalinos podremos identificar las zonas expuestas a riesgo sísmico, inundaciones, apertura de grietas u otros desastres. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, fue un poco más allá y aseguró que con ese documento mejorarán las normas de construcciones y se harán edificaciones más resistentes. El 15 de octubre Reforma, en la sección Ciudad, sacó como su nota principal las críticas de la asociación Suma Urbana al documento del gobierno capitalino. Josefina Mac Gregor señaló que "lo que nos dan como Atlas de Riesgo son una colección de mapas o capas de información". La manera de entender el riesgo, añadió, es relacionando "infraestructura, personas, medio ambiente y bienes, y en lo presentado, esto no está vinculado". El documento que entregaron, concluyó, "no es una herramienta útil para el manejo de riesgos". Así pues se tardaron cinco años para entregarnos un borrador. La tarde del domingo 15 de octubre Mancera tuvo que reconocer que, en efecto, el Atlas no ha sido concluido. La tarea dijo es "modernizarlo" para lo cual aceptó la sugerencia hecha por Suma Urbana de añadirle la información catastral. Buscando salir del paso responsabilizó a los que lo antecedieron: "Lo que nos entregaron cuando empezó la administración era [muy básico], casi casi documental". Para salir del enredo en que se estaba metiendo se refugió en el cantinfleo. No hay de qué preocuparse, explicó, "ahora que estamos llegando con esta implementación, pues es una implementación ya mucho más avanzada pero tenemos que potenciarla, tenemos que llevarla mucho más allá". Pues sí, pero se les acabó el tiempo. Tras el cantinfleo está un hecho: durante cinco años el gobierno de Mancera escondió información que hubiera podido evitar las pérdidas en vidas y propiedades causadas por inundaciones y sismos. ¿Por qué lo hicieron? Sostengo, como hipótesis de trabajo, que les importaron más los negocios con las inmobiliarias y los "moches" que la seguridad y el bienestar de los capitalinos. Llevan años enriqueciéndose con la especulación urbana y piensan seguir haciéndolo hasta el último día. Es tanta su codicia que hasta utilizan el sismo para seguir exprimiendo el suelo capitalino. La Asamblea Legislativa quiere aprobar a la carrera una Ley General de Reconstrucción que es un monumento al urbanismo salvaje y a la impunidad. Ofende que autorice la reconstrucción de los inmuebles derruidos, incluso de los que violaron la ley; agravia que los exima del cumplimiento con la Ley de Desarrollo Urbano y no les pide un diagnóstico público de por qué falló la estructura del inmueble; irrita que persistan en ignorar los riesgos. Lo hacen pese a que la construcción en zonas riesgosas está catalogada como un "delito grave" por la Ley General de Protección Civil. En lugar de castigar a los responsables, Mancera y los suyos les entregan el permiso de volver a ganar dinero. Estamos en manos de gobernantes más preocupados en hacer negocios con las inmobiliarias que en dar seguridad a los ciudadanos. Con ese comportamiento incumplen la regla más fundamental del contrato social. ¿Los vamos a dejar? Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=122138> Fecha de publicación: 18-10-2017

2018

FECHA: 25-07-2018

Claudia y la mafia .- Se cayó un pedazo de la Plaza Artz Pedregal y reapareció la mafia inmobiliaria para constatar que el gobierno capitalino perdió el control del urbanismo, de los espacios públicos y de la seguridad.

En 18 años llevamos tres jefes de Gobierno, cada uno con su propuesta urbanística. Andrés Manuel López Obrador quiso repoblar el Centro Histórico y promulgó el Bando 2; Marcelo Ebrard alentó las construcciones en las 16 delegaciones con la Norma 26 y Miguel Ángel Mancera quiso concentrarlas en polígonos de actuación. Los tres confiaron en las inmobiliarias para la implementación de sus planes y éstas privilegiaron la ganancia y se olvidaron del interés general. Pregunté en redes por ejemplos concretos y en el listado destacan Santa Fe, la Torre Mayor, la Supervía Poniente, Plaza Delta, Nuevo Polanco, la Torre Mítikah, etcétera. También hubo menciones a los miles de edificios ilegales que han brotado por doquier, aunque las delegaciones más maltratadas son Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Las consecuencias son de diversos tipos. Al encarecerse la vivienda y las rentas sobrevino el desplazamiento forzado de población, se multiplicaron los tiempos de traslado y se desnudaron las deficiencias e insuficiencias del transporte público. Creció el tráfico y los baches, escaseó el agua, desaparecieron árboles. A los nuevos desarrollos llegaron franeleros y ambulantes que se apropiaron de calles y banquetas para contribuir al desorden urbano. Un funcionario me cuenta que algunas empresas pidieron se dejaran los puestos de comida callejera para ahorrarse la instalación de comedores en edificios, donde el costo del metro cuadrado se tasa en dólares. Ha habido ciudadanos que se organizan, protestan y litigan. Aunque tengan la razón, generalmente son derrotados por una hermandad inmobiliaria con cinco extremidades: 1) la Asamblea Legislativa que emite leyes o concede autorizaciones a los cambios de uso de suelo; 2) los jefes de Gobierno que toleran el saqueo por razones que jamás han explicado a cabalidad; 3) los delegados que disfrutaban los beneficios de la piñata; 4) las inmobiliarias que saben codearse con todos los estamentos de los gobiernos capitalinos y sacar provecho a una legalidad hecha a la medida de sus necesidades y, finalmente, 5) los tribunales que se encargan de torear y desgastar a vecinos inconformes. La existencia de esta fraternidad que funciona como mafia puede constatarse en el derrumbe de Artz Pedregal. José María Riobóo es presidente del grupo que hizo el diseño estructural de la plaza comercial; tiene 18 años trabajando con los jefes de Gobierno y es asesor de López Obrador para el nuevo aeropuerto (también aspira al diploma del "constructor incómodo" del próximo sexenio). La esposa de Riobóo es Yasmín Esquivel Mossa, presidenta desde 2012 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cementerio de la luchas vecinales contra las construcciones ilegales. Óscar Kaufmann, vocero del Grupo Sordo Madaleno (principal constructor de Artz Pedregal) fue coordinador general de Comunicación Social durante unos meses con el ahora senador Miguel Ángel Mancera. Me resulta incomprensible el canibalismo de esta fraternidad (o mafia) que destruye o deteriora el entorno en que viven. Existe. La he observado y documentado en los últimos años. Como en el caso de los desaparecidos, sabemos de ella por el trabajo de vecinos, académicos y periodistas que aceptan nuevas construcciones en la capital siempre y cuando se hagan pensando en el futuro y en el interés general. El 1o. de julio se renovaron justificadamente las esperanzas de que habrá limpia y remozamiento de la arquitectura institucional. En el tema de violencia y paz los equipos de Andrés Manuel trabajan a marchas forzadas en una propuesta integral para todo el país. En la capital, existe un nexo indisoluble entre seguridad, urbanismo salvaje y la disputa por los

espacios públicos. En los últimos seis años Mancera soltó las riendas y el gobierno perdió el control de la capital. La próxima jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y su equipo llegan con grandes planes. Esperamos que reconozcan en sus políticas la existencia de esa mafia o hermandad inmobiliaria y que la contengan y desmantelen. Nos jugamos la capital. Colaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=138995> Fecha de publicación: 25-07-2018

2022

FECHA: 05-10-2022

Jueces letales .- Plenamente justificada la atención dada al aumento de la presencia militar y al hackeo que desnudó las vulnerabilidades de los uniformados; sin embargo, hay otras causas relacionadas con la seguridad esperando atención: la impartición de justicia, por ejemplo.

Una de las deficiencias estructurales más graves es lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Llevo más de seis años litigando en tribunales capitalinos porque alguien con poder y dinero me ha acusado en dos ocasiones por "daño moral". La Primera Sala de la Suprema Corte me exoneró de la primera, sigo lidiando con la segunda. Las vivencias acumuladas me permiten emitir una opinión negativa sobre la justicia capitalina. Me consta que algunos jueces son profesionales y honestos, pero la mayoría se distingue por la parcialidad, la ineficiencia y los abusos. En esto coinciden otros periodistas o ciudadanos que vivieron la experiencia de ser acusados por daño moral, así como abogados experimentados en los corredores del Poder Judicial y gobernantes capitalinos. Lo más impresionante es la naturalidad con la que se constatan los tráficos de influencia, los conflictos de interés y la frivolidad con la cual los jueces aceptan demandas por daño moral exigiendo 10, 20, 120 o 300 millones de pesos a los presuntos responsables. Quienes litigan asumen como normal la travesía por el purgatorio de los tribunales estatales: es un corredor obligado para llegar a los tribunales federales que tienen una bien ganada fama de imparciales y profesionales. Hago un paréntesis para hacer una comparación inevitable. En 1994 el presidente Ernesto Zedillo inició una reforma a profundidad de la justicia federal. Renovó a toda la Suprema Corte y a partir de ese momento empezó una larguísima transición que nos permite tener ahora resultados positivos. La capital se quedó rezagada. En 1997 la izquierda comenzó a gobernar la ciudad donde es indudable que se han ido ampliando diversas garantías ciudadanas; lo extraño es que esa misma izquierda haya dejado intactos los usos y costumbres del sistema judicial de la CDMX. Busco respuestas con un personaje de la izquierda capitalina quien lo atribuye a un entendimiento de jefes y jefas de Gobierno con la jerarquía judicial. Lo ejemplifica con Andrés Manuel López Obrador, quien como jefe de Gobierno entre 2000 y 2005 creó una mesa informal donde se discutían y acordaban aquellos asuntos que le interesaban (en el argot político se le llama "planchar" temas). Los primeros operadores de ese "planchado" fueron Juan Luis González Alcántara, quien presidió el Tribunal Superior capitalino, y José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno capitalino. En otras palabras, el entendimiento supone que los jueces atienden los intereses del jefe o jefa de Gobierno, quien corresponde dándoles una autonomía que amplía sus márgenes de discrecionalidad que han facilitado la ineficiencia y la corrupción. Eso explicaría, por ejemplo, el corrupto urbanismo

salvaje que tanto ha lastimado al valle de México. El arreglo deja en la indefensión a quienes consideran que sus derechos fueron violados por algún juez. El camino que queda consiste en presentar una queja contra el juez y el magistrado ante el Consejo de la Judicatura local. Lo hice durante mi travesía por los juzgados y confirmé lo que me habían advertido mis abogados: espera palos porque entre ellos se protegen. Ya apelé porque creo que los abusos tienen que documentarse. Buscando alguna alternativa, pregunto a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte y actual colega en El Colegio de México, si el ciudadano afectado por un fallo del Consejo de la Judicatura local puede apelar ante su equivalente federal: "Malas noticias", señala: "no hay nada qué hacer". Las anomalías aquí descritas se deben en parte, me dicen los enterados, a la indiferencia de los partidos políticos y a la falta de interés de la ciudadanía y los medios. En 2024 renovaremos a quienes gobiernan la capital. Una bandera legítima para los capitalinos será exigir a los partidos que se tomen en serio la reforma del Poder Judicial de la CDMX. Es por ello que seguiré documentando en mis columnas la letalidad de unos jueces locales que lastran y lesionan el edificio democrático común. Colaboraron Dulce Alicia Torres Hernández y Erika Giselle Delgadillo Martínez. @sergioaguayo Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: <https://www.reforma.com/jueces-letales-2022-10-05/op235233> Fecha de publicación: 05-10-2022